

**PODER Y PROTESTA POPULAR**  
**Movimientos Sociales Latinoamericanos**

Susan Eckstein (coord.) Ediciones Siglo XXI. México 2001.

PODER Y PROTESTA POPULAR EN AMERICA LATINA (Paginas 15-73)

¿Por qué los ciudadanos salen a la calle y no acuden a las urnas electorales para expresar su descontento con las políticas del gobierno, tanto bajo regímenes democráticos como con otros autoritarios? ¿Por qué los mismos coléricos trabajadores algunas veces apoyan movimientos revolucionarios mientras que otros expresan su cólera mediante la haraganería, las huelgas y los rituales? ¿Por qué algunos campesinos se conforman con las condiciones rurales que les desagradan mientras que otros no lo hacen? Es más: ¿por qué hay tipos de protesta semejantes que producen resultados diferentes en distintos países? Ni los paradigmas de los tipos de régimen de las ciencias políticas ni las teorías de los movimientos sociales que se centran sólo en las quejas, la organización y el liderazgo de los grupos desafiantes, explican con claridad las condiciones que inducen a la gente común a resistirse y a protestas contra la explotación, la degradación y la pobreza, la variedad de maneras en las que expresan su descontento con su suerte, y los resultados de su desafío.

Este capítulo y los siguientes subrayan la diversidad de expresiones de desafío y, lo que es más importante, la variedad de resultados del desafío en América Latina. Tomothy Wickham-Crowley y Cynthia McClintock tratan de los orígenes comunes, aunque con suertes distintas, de los movimientos de guerrilla rurales; León Zamosc examina cómo, y explica por qué las ideologías, las actividades y los logros de un movimiento campesino cambiaron con el tiempo, aun cuando su base social no lo hiciera; y June Nash se centra en las protestas de mineros que combinan creencias, costumbres y rituales primordiales con políticas revolucionarias y reaccionarias del siglo XX. Daniel Levine y Scott Mainwaring describen cómo, y explican por qué, los movimientos de las clases bajas basados igualmente en la teología de la liberación han diferido en sus desarrollos, dependiendo de condiciones específicas nacionales y locales. Manuel Antonio Garretón, Maria Helena Moreira Alves y Marysa Navarro, en cambio, se centran en los movimientos pluriclasistas de oposición común a los gobiernos represivos que no han podido resolver los problemas económicos nacionales, y Navarro trata, específicamente, del desafío organizado y encabezado por mujeres. John Walton examina las protestas que han surgido, en algunos países, de las clases media y "popular" en contra de las medidas de austeridad impuestas por los gobiernos para mitigar sus deudas externas, así como el desafío a los gobiernos por las políticas impuestas por los acreedores internacionales.

Los capítulos incluyen movimientos que abarcan el continente desde México en el norte hasta Argentina y Chile en el sur. Estos capítulos son una muestra simple de las maneras en que los latinoamericanos han desafiado, a menudo

valerosamente, las condiciones que juzgan intolerables. En muchos países de la región, los que protestan han sido despedidos de su trabajo, encarcelados, torturados, exiliados o muertos. Las élites latinoamericanas disponen de recursos considerables para la represión, recursos que, con demasiada frecuencia, han desplegado para defender sus intereses políticos y económicos cuando sin impugnados "desde abajo".

Si bien esta colección incluye estudios sobre los grupos que se han dedicado a actividades de protesta en los decenios recientes, no incluye ni todo el universo de grupos y movimientos ni una muestra representativa de los mismos. El propósito del libro es el de descubrir patrones comunes en movimientos que tienen bases sociales y metas diferentes, movimientos en contextos sociopolíticos distintos y el desafío que se expresa de manera diversa. Nuestro conocimiento de América Latina es lastimosamente inadecuado y se centra principalmente en las preocupaciones y perspectivas de la élite. En consecuencia, sabemos mucho más sobre las estructuras estatales, los partidos políticos y los grupos "populares". Por lo general, sólo cuando se desafía a los intereses de Estados Unidos y a la hegemonía de la clase dominante, como ocurrió en América Central en el decenio de 1980, es cuando se centra la atención en los grupos subordinados.

Nuestra limitada comprensión analítica y empírica de la protesta en América Latina denota también prejuicios y modas disciplinarios. Cuando la investigación de las ciencias sociales sobre América Latina "despegó" en el decenio de 1960, estuvo muy influida por la teoría de la modernización y sus supuestos conductistas, según los cuales los individuos serían económicamente móviles y los países se desarrollarían económicamente y se volverían más democráticos políticamente cuando la población asimilara los valores occidentales y participara en las instituciones modernas. Sin embargo, la democracia sería socavada por las políticas "extremistas" si los individuos fuesen desarraigados de su modo de vida tradicional sin haber sido absorbidos por las instituciones modernas o si sus expectativas no se materializasen.

El hecho de que la urbanización y la marginación masivas no hicieran surgir movimientos revolucionarios obligó a un número cada vez mayor de expertos (aunque ciertamente no a todos) a abandonar los análisis conductistas. El centro de preocupación pasó de la sociedad al estado, a análisis del autoritarismo burocrático y a criterios corporativistas de las relaciones entre el estado y la sociedad. El acento se puso en el orden y el control social y no en la movilización, el desafío y la protesta. Al mismo tiempo, las "ideas de dependencia" cuestionaron los supuestos evolutivos, culturales e individualistas sobre los que se sentaron las premisas de la teoría de la modernización, argumentando, en su lugar, que el desarrollo latinoamericano debe ser comprendido en el contexto de la dinámica de la economía global. Sin embargo, al subrayar de qué manera la dinámica global limitaba las opciones latinoamericanas, los escritores encontraron que había poca cabida para el voluntarismo y los conflictos izquierdistas basados en inexplicadas relaciones no económicas.

Los latinoamericanos han sido más desafiantes de lo que la literatura disponible nos hizo creer, si bien menos de lo que hubiera cabido esperar, dadas las

injusticias y desigualdades existentes. No obstante, la capacidad de penetración de la protesta no significa que la dinámica política y económica global sea inconsecuente. Varios de los autores de este volumen destacan cómo las fuerzas globales directa e indirectamente moldea el estallido y el resultado de los movimientos de protesta. Pero el efecto de estas fuerzas debe comprenderse en el contexto de las estructuras, los mecanismos sociales y las tradiciones culturales locales. Los legados coloniales similares y la misma subyugación poscolonial a las fuerzas económicas y políticas globales no pueden explicar la diversidad de formas en que nos latinoamericanos se han opuesto a las condiciones que les desagradan, incluso estando sujetos al mismo conjunto de represiones externas.

Los lentes analíticos a través de los cuales los autores que han colaborado en este libro ven los movimientos de protesta y de resistencia son algo eclécticos. La diversidad refleja los sesgos teóricos y metodológicos de los autores y de sus disciplinas, que incluyen la sociología, las ciencias políticas, la antropología y la historia. Pero, independientemente de sus diferencias, los autores comparten una perspectiva histórico-estructural. Estos autores muestran que la ideología, los valores, las tradiciones y los rituales son importantes, y atribuyen la importancia de la cultura a la dinámica de grupo, de organización y de comunidad y a otras características de la estructura social. Los autores nos muestran que el patrón de desafío depende de las circunstancias históricas.

La estructura social tiene importancia porque la distribución desigual del poder, de la riqueza y del prestigio produce intereses dispares en la gente que está situada de manera diferente en las jerarquías de grupo. Quienes controlan los medios de coacción física y los medios de producir riqueza tienen poder sobre quienes carecen de tales medios. Este poder puede incluir el control de las ideas, así como de los recursos materiales. Cuando las clases pobres y trabajadoras se rebelan no es porque sea intrínsecamente perturbadoras. Se rebelan porque tienen medios alternativos limitados para expresar sus opiniones y para ejercer presión en pro de un cambio.

Los estudios de caso en este libro muestran que las relaciones económicas, especialmente las relaciones económicas cambiantes, son la causa principal de protesta y de presión a favor de un cambio. Sin embargo, se mostrará que los medios escogidos para protestas dependerán de los factores del contexto: de los lazos entre clases, institucionales y culturales; de las estructuras del estado; y de opciones reales, o, por lo menos, así percibidas, como salida en lugar de rebelarse. Los análisis demuestran también que la política y la religión, así como las preocupaciones basadas en la raza, la etnia y el género, independientemente de las fuerzas económicas o en combinación con ellas, pueden ser fuentes de descontento que incitan al desafío.

El enfoque histórico-estructural que los autores emplean difiere de los análisis que explican la acción colectiva en el nivel del individuo. Las explicaciones psicológicas subrayan los rasgos de carácter y los estados de tensión que predisponen a los individuos a la rebelión. Los individuos con personalidad autoritaria (Hoffer, 1951; Lipset, 1981) y aquellos que están enajenados o cuyo sentimiento es resultante de la destrucción de las estructuras de la sociedad

(Kornhauser, 1959), que se sienten frustrados y privados en relación con otros con los cuales se comparan (Davies, 1962; Feierabend y Feierabend, 1971; Gurr, 1970) y que se sienten atraídos por nuevas normas y valores (Smelser, 1963) han sido descritos como tipos desafiantes, como irracionales al rebelarse.

Los teóricos partidarios de la elección racional (véanse, por ejemplo, Olson, 1965; Popkin, 1979), también explican el desafío en el nivel del individuo. No obstante, sostienen que la movilización es una respuesta calculada, basada en las evaluaciones individuales de los costos y los beneficios de no acatar el statu quo. Olson plantea que los individuos racionales y egoístas no tienden a asumir los riesgos de la movilización para "el bien colectivo", porque pueden actuar independientemente. También sostiene que el desafío colectivo sólo es probable cuando los actores reciben recompensas selectivas por su participación en movimientos contra el statu quo y cuando los que no participan son penalizados por su falta de participación.

La teoría basada en la opción racional no puede explicar cómo las formas de solidaridad de grupo, el compromiso moral con la colectividad y otros valores no racionales pueden movilizar a la gente para actuar independientemente de su propio interés individual. Lo que es racional para el individuo no siempre es congruente con lo que eligen los grupos, inspirados política o culturalmente. Además, las participaciones de grupo y las características culturales moldean las percepciones de los individuos y de qué manera desafían a las condiciones que les desagradan. Por consiguiente, incluso cuando el desafío traduce el propio interés del individuo, lo que los individuos consideran que es su propio interés sólo puede ser comprendido en el contexto de fuerzas sociales y culturales más vastas.

A su vez, es frecuente que las explicaciones en el nivel individual no puedan explicar el efecto que producen los actos de desafío, puesto que el resultado real de un acto difiere con frecuencia del resultado previsto que motivó la rebelión. Es decir, la serie de formas según un patrón dentro del que los individuos y los grupos responden a condiciones que consideran insatisfactorias y la serie de resultados de los actos de desafío no dependen solamente de los atributos psicológicos, el estado de ánimo y la toma de decisión racional individual. Hay fuerzas culturales y estructurales que influyen en las percepciones individuales y de grupo, en sus sentimientos y acciones, aunque no siempre de forma evidente para los actores. Estas fuerzas culturales y estructurales influyen en la medida en que se considera que cualquier situación es intolerable, tanto si los agravios son evidentes como si son hechos mediante un desafío solapado, y tanto si los agraviados buscan soluciones individuales a su suerte como si buscan soluciones colectivas.

Los estudios que reúne este libro señalan las características específicas de la estructura social, que condicionan las formas en que los grupos subordinados abordan su suerte, y también las respuestas de la élite. Los autores muestran que el patrón de desafío es modelado por características estructurales, independientemente de los atributos psicológicos y de ira que puedan haber predispuesto a la gente a protestar. Los autores señalan también el impacto del desafío en las respuestas de las élites y en las condiciones macropolíticas y macroeconómicas, que no siempre se pueden deducir de los factores que inducen a

los individuos a desafiar el statu quo. Es posible que los rebeldes se encuentren con consecuencias que no habían previsto. Por consiguiente, los análisis muestran que los rasgos de la estructura social deben formar parte, teórica y empíricamente, de cualquier comprensión cabal de la protesta y de la resistencia.

Es evidente que no somos los primeros en plantear una perspectiva histórico-estructural. Marx y sus discípulos han sostenido que los intereses económicos opuestos generan conflicto y desafío. Este capítulo y los análisis que siguen se basan en ciertas tradiciones marxistas: en los análisis marxistas que ponen de manifiesto la importancia del mercado así como la de las relaciones de producción, relaciones económicas que cambian y que no son meramente relaciones económicas bien establecidas, e injusticias cuya raíz se encuentra en las relaciones económicas y no económicas. La vida de la gente está muy influida por su "ubicación" económica, pero también por otras fuerzas. Las relaciones económicas no determinan de manera mecánica si las personas en una posición subordinada se rebelarán, y cómo y cuándo lo harán. Cabe recordar que el propio Marx reconoció que la política de clases varía con sus circunstancias históricas.

Los no marxistas han señalado también una relación entre la estructura social y los movimientos de protesta. Hay un vasto cuerpo de literatura en Estados Unidos que interpreta los movimientos sociales desde una perspectiva estructural. Sin embargo, buena parte de esta literatura no está históricamente fundamentada, y otra es demasiado abstracta para explicar los matices importantes de los movimientos. Neil Smelser (1963), por ejemplo, afirma que entre los factores determinantes del desafío colectivo figuran el carácter propiciatorio (la permisividad de los mecanismos sociales para la generación de movimientos sociales), la tensión estructural (la existencia de ambigüedades, privaciones, tensiones y conflictos en la sociedad), y el colapso de los controles sociales. Pero ¿cuáles son las características de la estructura social que condicionan el conjunto de respuestas a las tensiones y cuáles moldean resultados de desafío? Su tesis no especifica adecuadamente una respuesta a estas preguntas.

Aunque la tesis de Smelser puede tener una validez en un nivel abstracto, los ensayos incluidos en este volumen ilustran la razón por la que esta teorización abstracta no es muy esclarecedora: deja mucho sin explicar. La fuerza de estos ensayos radica no sólo o principalmente en sus bases teóricas explícitas o implícitas, sino también en su comprensión sutil de la variabilidad histórica. La tesis de Smelser, en cambio, no nos ofrece un marco para comprender, por ejemplo, por qué los programas de austeridad descritos por John Walton en su ensayo, provocaron diferentes tipos de movimientos de protesta y movimientos con resultados diferentes en distintos países latinoamericanos. Tampoco ayuda a explicar por qué el movimiento campesino colombiano, que Zamosc analiza, comenzó como un movimiento de reforma iniciado por el estado, luego rompió con el mismo y se radicalizó y, más tarde aún, se volvió conservador e intrascendente. El enfoque de Smelser tampoco puede explicar las distintas formas en que los mineros del estaño boliviano han expresado sus quejas basadas en la clase: en distintos momentos esas quejas fueron encauzadas hacia rituales enraizados en su herencia campesina, a movimientos revolucionarios y a l apoyo a políticos reaccionarios.

La teoría de la movilización de los recursos es, quizás, la mejor formulada y no marxista que explica los movimientos sociales en el nivel de la organización y no del individuo (véanse en Jenkiss, 1983, y en McAdam, McCarthy y Zald, 1987, estudios excelentes de la "escuela" de movilización de los recursos): los que proponen esta perspectiva sostienen que las quejas son endémicas en la estructura social y que, por ende, no pueden explicar por sí solas el surgimiento de movimientos sociales. Al igual que los teóricos de la opción racional, estos autores ven las acciones de los movimientos como respuestas racionales a los costos y las recompensas de diferentes líneas de acción. Sin embargo, hacen hincapié en que los movimientos dependen, sobre todo, de los recursos, la organización de grupo y las oportunidades para la acción colectiva. Dichos autores señalan que los recursos económicos, de comunicación y humanos (es decir, las capacidades de organización y legales y el trabajo no especializado de sus partidarios) pueden tener importancia, y que el grado previo de organización de los grupos afecta también la movilización potencial de los mismos. Los teóricos de la movilización de los recursos plantean que cuando los grupos comparten fuertes identidades distintivas y densas redes interpersonales, pueden movilizar fácilmente a los miembros: tanto la identidad como las redes proporcionan una base para los incentivos colectivos. Dichos teóricos sostienen también que los organizadores externos o los que emprenden movimientos pueden ser críticos para la movilización de los mismos, especialmente entre los grupos desposeídos que tienen una experiencia política y organizadora mínima.

Piven y Cloward (1979) también explican la protesta en el nivel estructural, no en el nivel individual. Sin embargo, no están de acuerdo con los teóricos de la movilización de los recursos, quienes atribuyen el movimiento social potencial primordialmente a las características y a los recursos de organización. Estos autores ven la organización, especialmente con el transcurso del tiempo, como un factor que socava las posibilidades de los grupos subordinados para lograr un cambio. Piven y Cloward sostienen que los pobres son quienes más probabilidades tienen de lograr un cambio mediante la disolución, y que la disolución puede ser movilizadora sin una organización formal. A su juicio, las organizaciones son vulnerables a la oligarquía interna y a la apropiación externa, y las organizaciones que se crean dentro de movimientos tienden a embotar la fuente principal de influencia del movimiento, la militancia. Al sostener que la organización formal es necesariamente incompatible con la movilización. Piven y Cloward exageran su punto de vista. Estos autores señalan correctamente que hay tendencias conservadoras en la mayor parte de las organizaciones, pero que las organizaciones también pueden agrupar a la gente e infundir en ella valores que incitan al desafío, intencionalmente o no.

Otros estudios de los movimientos sociales han señalado que el origen y el destino del desafío no pueden ser comprendidos meramente, o incluso principalmente, ni en el nivel de rebeldía de la organización y del grupo ni en el nivel del individuo. Skocpol (1979) y Walton (1984), por ejemplo, subrayan cómo las estructuras y las influencias macroeconómicas moldean las rebeliones. Estas macrofuerzas pueden moldear la protesta de maneras que no son siempre evidentes para la gente involucrada. Más adelante, veremos cómo estas macrofuerzas pueden incluir en la forma en que las quejas se expresan y en las probabilidades de éxito que el desafío pueda tener.

Al basarse en una tradición estructural ya existente, este libro se propone especificar, como ninguno lo ha hecho hasta la fecha, las características institucionales y culturales que moldean las respuestas a las quejas e influyen en los resultados de la protesta y de los movimientos de resistencia en América Latina. Este capítulo ofrece un marco para comprender las formas variadas que el desafío adopta, sus distintos orígenes y sus resultados diversos. En él describo cómo, y explico por qué, las relaciones y las condiciones económicas son la causa principal del desafío, pero también la forma en que los conflictos basados en relaciones políticas, de género, de raza y de etnia también pueden tener importancia. Luego, el enfoque del capítulo pasa a los factores de contexto que condicionan las respuestas a las quejas, a saber, los mecanismos institucionales locales, las alianzas de clases, las culturas populares de resistencia y las estructuras estatales. Después, considero las características estructurales que moldean los resultados de desafío, con inclusión del impacto de las diversas, pero estructuralmente basadas, respuestas de la élite. El capítulo termina con un resumen de algunas de las características distintivas de la herencia latinoamericana que han pautado el desafío en la región de manera distinta a la de otras partes del mundo.

Los capítulos restantes ilustran las propuestas establecidas en este ensayo inicial y, en realidad, ofrecen algo del material en cuestión para algunas de las propuestas que presento. Puesto que el número de estudios es pequeño y que no han sido escogidos al azar, no pueden probar, por sí mismos, una teoría dominante de las causas y las consecuencias de la protesta y la resistencia. Sin embargo, los análisis son interesantes por derecho propio y nos ayudan a comprender tanto la manera en que los quejosos intentan aliviar su suerte como lo diverso del éxito que obtienen.

Precisamente debido a que las causas y las consecuencias del desafío son complejas (aunque siguen un patrón), este libro tiene objetivos modestos. Ninguna teoría puede explicar y predecir adecuadamente la gama completa de maneras en las que los grupos en la sociedad civil expresan su cólera y los efectos que tiene el desafío. Sin embargo, una comprensión mejor de los factores que enmarcan los movimientos de desafío y el estudio detallado de protestas específicas pueden contribuir a establecer "teorías de mediana alcance", para decirlo con las palabras de Merton (1961).

A pesar del nivel de detalle en los ensayos, este libro también será de interés para quienes no se especializan en el tema. Aparte de la importancia histórica de los movimientos que los autores describen, el conocimiento de las experiencias latinoamericanas puede contribuir a una comprensión mejor de las características universales e históricamente específicas de los movimientos de protesta. Gran parte de la literatura estadounidense sobre movimientos sociales tiende a hacer generalizaciones partiendo de la experiencia de Estados Unidos. Por consiguiente, los estudios que tiene este volumen pueden ayudarnos de manera indirecta a comprender mejor las características históricas y de contexto que pautan los movimientos en el mundo industrial, a la vez que nos ilustran de manera directa sobre los movimientos en América Latina.

## LAS FORMAS VARIADAS DE PROTESTA

Las rebeliones en gran escala, aparte de las revoluciones, son raras, y cuando ocurren suelen ser aplastadas o dar lugar a la creación de estados que subordinan los intereses de los rebeldes a los de los grupos dominantes y gobernantes. Las expresiones de desafío que no llegan a ser una revolución, por su intención y su efecto, son mucho más frecuentes. La gama de maneras en las que la gente expresa un desafío está delimitada por la estructura social, al igual que el comportamiento socialmente más aceptado está a su vez delimitado.

James Scott (1986) sostiene correctamente y con justa percepción que los campesinos se dedican con frecuencia a formas de resistencia cotidiana como la haraganería, el incumplimiento pasivo, el engaño, los hurtos, la calumnia, el sabotaje y el incendio premeditado que están muy cerca del desafío colectivo declarado. Hay razones para creer que otros grupos económicamente subordinados pueden resistirse a las condiciones impuestas por los grupos dominantes de maneras muy semejantes, dependiendo de las circunstancias. Para la gente que está en posiciones estructuralmente desventajosas, estas "formas de resistencia cotidiana" pueden lograr más, tanto a corto como a largo plazo, que las protestas públicamente organizadas; esto es especialmente probable cuando los riesgos de represión son grandes. Su desafío puede requerir poca o ninguna coordinación y es posible que no desafíe de manera directa al dominio y las normas de la élite. Si bien estas formas de desafío raras veces provocan un cambio importante, pueden, en ocasiones socavar la legitimidad del gobierno y la productividad hasta el punto en que las élites políticas y económicas sienten la necesidad de instituir reformas importantes.

Además de estas "formas de resistencia cotidiana", hay maneras más directas y explícitas en las que los quejosos han protestado históricamente por las condiciones que les desagradan y por las que han tratado de buscar el cambio: huelgas, apropiaciones de tierras, manifestaciones, disturbios, rebeliones y protestas. En estos casos el grado de coordinación suele ser mayor.

Tales variadas expresiones de desafío tienen en común por lo menos una característica importante: conllevan los esfuerzos de los que son política y económicamente débiles para resistirse mediante cauces no institucionalizados a las condiciones que consideran injustas.

Incluso cuando los grupos subordinados desafían colectiva y públicamente las condiciones que les desagradan, es característico que no recurran a la violencia, sobre todo al principio. Si la violencia se declara, suele ser iniciada por grupos más poderosos con el fin de coaccionar a los débiles a volver a la docilidad. En América Latina, por ejemplo, el ejército y la policía han sido responsables de muchos más heridos y muertos que los grupos guerrilleros.



Los estudios de caso que aparecen en este libro se centran principalmente en formas de desafío coordinadas y claramente no violentas. Sin embargo, la mayor parte de los grupos de investigados combinan la resistencia y el desafío abiertos con otras formas más sutiles y algunos han combinado la protesta no violenta con la violenta. Por ejemplo, en su exposición sobre el movimiento guerrillero de Perú, Sendero Luminoso, Cinthya McClintock destaca cómo los campesinos que no estaban lo suficientemente comprometidos como para unirse a los rebeldes, colaboraron calladamente con ellos con actos que contribuyeron a la erosión de la legitimidad del gobierno. Los campesinos de la zona en donde Sendero Luminoso comenzó sus operaciones apoyaron tácitamente a la guerrilla, negándose a ayudar a los oficiales a exterminar a los guerrilleros y proporcionándoles a éstos alimentos, techo e información; además, sabotearon las elecciones, no mediante el ataque público al sistema político o, según la terminología de Gramsci (1971) mediante el ataque frontal, sino de manera callada e individual cuando gran número de ellos invalidó su voto. Una vez que Sendero Luminoso logró establecerse en la región montañosa de Ayacucho, pudo también difundir su base a otras regiones del país.

Esta relación entre la confrontación abierta y las formas de desafío más sutiles también es abordada en otros ensayos de este libro; así, June Nash muestra cómo los mineros bolivianos del estaño, mediante su participación regular en rituales seculares basados en su pasado agrícola, fortalecieron el espíritu de rebelión que ha impulsado huelgas, protestas y hasta revolución cuando las condiciones estuvieron "maduras". Los rituales están muy arraigados y proporcionan la base sólida en la cual se apoyan las protestas políticas explícitas. Los rituales y los actos abiertamente políticos se basan en las quejas compartidas. En su artículo sobre religión y protesta, Daniel Levine y Scott Mainwaring, a su vez, consideran cómo la participación en las "comunidades de base", patrocinadas por la iglesia y que nominalmente no tienen un carácter político, puede o no sentar las bases de movimientos políticos de protesta.

Aunque los mismos grupos e individuos pueden participar en formas más sutiles de resistencia declarada, el repertorio de la acción colectiva en el cual se basan los grupos tiende a ser limitado y a estar muy influido por las características sociales estructurales y por las tradiciones históricas. No es casual que algunas personas se rebelen negándose a trabajar, o negándose a hacerlo con toda su capacidad, mientras que otras roban y otras aun se manifiestan en las calles o se dedican al sabotaje electoral. Los obreros de las fábricas hacen huelga porque con ella pueden desafiar las reglas del lugar de trabajo y limitar las utilidades de los dueños. Los trabajadores del sector informal, en cambio, se apropian de terrenos para construir viviendas y protestan contra los aumentos del costo de la vida. Por muy descontentos que puedan estar con su trabajo y con sus ganancias, el marco en que laboran no es el adecuado para el desafío colectivo: son empleados de pequeñas empresas, que no ofrecen ninguna seguridad de empleo, o son personas que trabajan por cuenta propia.

Los diferentes grupos no sólo se dedican a distintas formas de desafío. Con el transcurso del tiempo, los repertorios sociales también han cambiado. Charles Tilly (1978) y sus asociados (Tilly y Tilly, 1981; Shorter y Tilly, 1974; y Tilly, Tilly y Tilly, 1975) señalan, por ejemplo, que en Europa occidental, entre los siglos XVIII y XIX, el repertorio pasó de los motines para obtener alimentos a la resistencia a la

conscripción, a la rebelión contra los recaudadores de impuestos y a las invasiones organizadas de campos y bosques para manifestaciones, reuniones de protesta, huelgas y reuniones electorales. En el siglo XX, no sólo han sido más frecuentes y prolongadas las actividades realizadas en gran escala por asociaciones, con propósitos especiales, sino más comunes. Tilly y sus colegas atribuyen el cambio a la concentración económica y al incremento de la proletarización por una parte, y, por otra, al poder creciente de la nación y a la institucionalización de la democracia liberal. A medida que los lugares de poder de la sociedad cambiaron, los intereses, las oportunidades y la capacidad de la gente común para actuar en conjunto se modificaron.

Sin embargo, las tradiciones históricas, así como los mecanismos institucionales, influyen en la manera en que la gente responde a las condiciones que les desagradan. La gente aprende mecanismos de desafío, en parte como una reacción a las respuestas del grupo dominante. El repertorio latinoamericano ha sido moldeado, como veremos después, por la dependencia del comercio exterior, la tecnología y el capital, una tradición centralista burocrática y un criterio característico del mundo católico.

América Latina es, en mayor medida que Europa, un "museo vivo". Allí han aparecido nuevas formas de desafío, aunque persisten las viejas formas. De esta manera, los ancestrales tipos de protesta, como los motines para obtener alimentos y las apropiaciones de tierra rurales ahora se dan junto a las huelgas, las manifestaciones y las reuniones de protesta. El repertorio latinoamericano es todavía más amplio y está basado, sin duda, en la naturaleza más parcial de la transformación industrial de la región, las oportunidades económicas limitadas que conlleva el "desarrollo dependiente" y el poder más limitado de la nación sobre la vida de la gente común. Desde el punto de vista económico, la industrialización de América Latina produjo el proletariado. Sin embargo, en la mayor parte de los países de la región, los obreros fabriles sólo representan una minoría de la fuerza de trabajo, mientras que la mayoría de los trabajadores siguen en la agricultura o son empleados, ya sea por cuenta propia o por pequeñas empresas parternalistas.

El repertorio más amplio de América Latina está basado también en su singular historia política. La historia latinoamericana en el siglo XX ha estado marcada por alternancias entre un gobierno autoritario y otro democrático. En cambio, y salvo algunas excepciones, Europa occidental pasó por una democratización progresiva. Así como las condiciones de gobierno de América Latina han oscilado, también ha oscilado la naturaleza de la lucha política; por esta razón, las bases del conflicto político no han evolucionado de una forma a otra, como ocurrió históricamente en Europa.

A pesar de tener algunas experiencias políticas y económicas compartidas, las historias de los países latinoamericanos no han sido enteramente paralelas. Las variantes nacionales en los niveles de industrialización, el momento y el alcance de la sindicalización, la riqueza económica y la represión política, por ejemplo, establecen entre los países latinoamericanos algunas diferencias de patrón en las expresiones contemporáneas de desafío. Los modos diferentes de desafío "popular" contra las medidas de austeridad impopulares descritos por Walton –motines en

Jamaica, manifestaciones callejeras en Chile y huelgas en las naciones andinas-están basadas, al menos en parte, en diferentes tradiciones de protesta que han evolucionado a lo largo de los años, en países con historias políticas y económicas distintas. Las manifestaciones no violentas son, de manera característica, una forma chilena de protesta. Tal como Garretón señala, los chilenos recurren a las manifestaciones no sólo para desafiar a la autoridad por las medidas que han causado que su nivel de vida haya caído abruptamente, sino también para desafiar al gobierno represivo de Pinochet por sus injusticias políticas. Sin embargo, los grupos de quejosos han salido a la calle para presionar en pro de un cambio, tanto cuando tenían gobiernos elegidos democráticamente como cuando estaban bajo gobiernos militares. Las clases "populares" lo han hecho de manera más característica. Sin embargo, cuando el gobierno socialista de Salvador Allende favoreció a los sectores más depauperados y a los de trabajadores, las clases medias se movilizaron también por cauces extrainstitucionales: las amas de casa con sus sartenes y cacerolas, los choferes de camión con sus vehículos (que usaron para bloquear el tránsito y la entrega de bienes). De hecho, desde entonces, las sartenes y cacerolas han formado parte del repertorio simbólico de protesta en Chile. Los opositores del gobierno militar de Pinochet las golpearon ruidosamente en determinadas situaciones.

En América Latina también sobresale el modo boliviano de protesta. Cuando los campesinos y habitantes de las ciudades de Bolivia están descontentos con las políticas, bloquean las carreteras. En un país cuyo sistema de carreteras está muy poco desarrollado, esta táctica de desorganización puede ser muy eficaz.

El desafío, abierto o encubierto, supone una intención. Por consiguiente, el desafío debe distinguirse analíticamente del incumplimiento basado en la ignorancia o en la confusión sobre el comportamiento esperado y apropiado. Sin embargo, tanto el incumplimiento deliberado como el involuntario puede producir las mismas consecuencias sociales, con inclusión de una erosión de la legitimidad de la élite.

La intención del desafío puede ser defensiva, restauradora u ofensiva; según Tilly, puede ser reactiva o proactiva, destinada a negar demandas hechas por grupos súper ordenados o a ejercer presión a favor de nuevas demandas. Aunque el desafío sea deliberado, puede provocar cambios que los actores nunca se propusieron. La incapacidad para explicar analíticamente las maneras en que los resultados del desafío pueden diferir de la intención es una deficiencia de gran parte de la literatura existente sobre los movimientos de protesta y los sociales. Por ejemplo, en la Revolución mexicana, los zapatistas protestaron contra los agentes del capitalismo agrario que violaron sus derechos ancestrales sobre la tierra. Su movimiento fue anticapitalista y, en espíritu, restaurador. Sin embargo, su inmovilidad, una vez que les devolvieron sus parcelas de tierra de mala calidad, facilitó el desarrollo capitalista en el resto del país. De igual manera, Nash muestra en el capítulo 5 cómo los mineros bolivianos han apoyado movimientos revolucionarios y golpes de estado militares populistas sólo para dar paso a gobiernos que se volvieron contra ellos. Si bien la gente de todas las clases tiende a tener una comprensión limitada de las fuerzas de la historia, la posición subordinada de los que son débiles, política y económicamente, limita su capacidad tanto para comprender las ramificaciones de sus actos como para contrarrestar el poder de los grupos súper ordenados, incluidos los grupos que no pensaron que serían importantes. Los grupos subordinados tienden a dirigir su desafío contra

blancos locales, pero las estructuras y las circunstancias nacionales e incluso internacionales pueden influir en lo que sus actos logran. Examinaré los factores que moldean los resultados del desafío después de haber considerado cómo las bases sociales y los factores contextuales marcan el patrón de protesta.

## LAS BASES SOCIALES DEL DESAFIO

El dominio y la subordinación son características comunes de la vida institucional y dan lugar a ciertos intereses contradictorios. Las posiciones elevadas inclinan a sus ocupantes a preservar el statu quo, mientras que las posiciones inferiores disponen a sus ocupantes al cambio para mejorar su suerte. Las desigualdades y las injusticias estructurales pueden ser toleradas por los subordinados pero, desde luego, no siempre. Dada la importancia de trabajar para ganarse la vida y la extracción del plusvalor a los trabajadores por parte del empleador, existen razones estructurales por las que el conflicto se ha centrado con frecuencia en el salario y en las condiciones de trabajo. Esto es cierto incluso en las empresas socialistas dentro de las sociedades socialistas. Sin embargo, la naturaleza de los intereses opuestos de la gente en las diferentes jerarquías institucionales y las respuestas de las personas en posiciones subordinadas a dichos intereses están moldeadas por marcos de organización y por una sociedad más amplia dentro de la cual las organizaciones están inmersas. Más adelante, considero cómo la producción y el mercado, pero también las relaciones de género, políticas, raciales, étnicas y religiosas pueden ser fuentes de contienda y focos de desafío.

### Conflictos originados en las relaciones de producción

La gente sufre privaciones o}en marcos concretos. La ira de los trabajadores se dirige básicamente a sus patrones, a quienes consideran sus opresores, no a vastas fuerzas invisibles como el capitalismo o a agentes distantes del capitalismo como los bancos, que finalmente pueden ser responsables de su suerte.

Marx nos da razones para creer que los trabajadores industriales serían más desafiantes que los campesinos no porque sus condiciones de trabajo sean peores, sino porque gran número de ellos sufre su miseria colectivamente. Desde que los gobiernos latinoamericanos, después de la segunda guerra mundial, fomentaron la industria, al principio para el consumo interno y más recientemente para la exportación, la lógica de Marx nos llevaría a esperar que la lucha de clases debería haberse intensificado a medida que las bases productivas de los países cambiaban.

Hubo una razón más para creer que la industrialización en América Latina avivaría la intranquilidad: los obreros fabriles en la región ganan poco en comparación con sus equivalentes en los países muy industrializados. Sin embargo, la respuesta de los obreros fabriles latinoamericanos a sus situaciones de trabajo debe comprenderse en el contexto de sus respectivos países. Son un grupo relativamente privilegiado. Figuran entre la minoría que gana, por lo menos, el

salario mínimo oficial y que tiene prestaciones de desempleo, salud y seguridad social. Los trabajadores industriales han logrado ganar estas concesiones debido, en parte, a que son comparativamente pocos, pero también a que su trabajo se ha considerado fundamental para el avance económico de sus respectivos países y porque, inicialmente, los partidarios de la industrialización buscaron el apoyo de los obreros en su lucha por el control del estado en contra de las oligarquías ya afianzadas. En esas circunstancias, los gobiernos y los patrones privados hicieron concesiones al proletariado aunque con mucha frecuencia lo hicieron sólo en respuesta a huelgas reales o potenciales.

Aunque en ocasiones hay huelgas autorizadas por el sindicato obrero, los sindicatos organizan la mayoría de ellas. Vemos aquí cómo el desafío y la organización pueden estar vinculados estrechamente. Sin embargo, más adelante veremos que el efecto de la sindicalización en la actividad huelguística dependió de las relaciones entre el estado y el sindicato en cuestión, y no de la organización per se.

Si bien la huelga denota intereses opuestos fundamentales entre el trabajo y el capital, su ausencia no siempre significa que los trabajadores estén satisfechos. Es menos probable que el descontento se exprese en paros en el trabajo coordinados bajo regímenes no democráticos en los que la huelga está prohibida y cuando es muy probable que sea reprimida, puesto que, con frecuencia, los costos se consideran superiores a las ganancias posibles. Esta interpretación costo-beneficio de la actividad huelguística es congruente con la teoría de la opción racional. Allí donde las huelgas están prohibidas, los trabajadores que se declaran en huelga pueden incluso correr el riesgo de ser despedidos. Sin embargo, la teoría de la opción racional no nos sensibiliza a la variedad de maneras en las que los trabajadores pueden, en esas circunstancias, socavar los intereses de la élite sin confrontar directamente los poderes existentes: por ejemplo, mediante la haraganería, el ausentismo y los pequeños robos. Este desafío silencioso socavará, como mínimo, la capacidad de los patrones para producir un superávit y es posible que también les produzca algunas ganancias materiales a los trabajadores. Las diversas expresiones del desafío no pueden explicarse en el nivel del individuo, en el cual están basadas las premisas de la teoría de la opción racional.

Cabe esperar que la naturaleza de las quejas de los trabajadores difiera entre las empresas socialistas y las capitalistas, debido a que las desigualdades en la distribución del poder, la riqueza y el prestigio son muy distintas en los dos tipos de jerarquías de organización y tienen diferentes expectativas sobre la justicia y los objetivos de la empresa. Cuba, por ejemplo, afirma ser un "estado proletario", y la mayoría de las unidades de producción del país son propiedad del estado. Sin embargo, la identificación pública del estado con los trabajadores no ha eliminado las tensiones entre trabajadores y administradores. La revolución ha cambiado la naturaleza de las quejas de los trabajadores y la forma en que se expresan. Puesto que los trabajadores cubanos no pueden declararse en huelga y que los sindicatos están políticamente controlados, los trabajadores han recurrido a formas más calladas y más encubiertas de desafiar las condiciones de trabajo que les desagradan. En ocasiones han expresado su resentimiento con bastante eficacia, con sus manos y sus pies, en una escasa productividad y un elevado ausentismo. Por ejemplo, su bajo nivel de cumplimiento obligó a la dirección revolucionaria a modificar las políticas aplicadas durante el decenio de 1960. En aquel tiempo, se

solicitó a los trabajadores que trabajaran más horas y, en el caso de la zafra, sin pago adicional. Mientras tanto, el nivel de vida material cayó en picada, ya que el gobierno hizo hincapié en las exportaciones y en las inversiones en industrias básicas. Aunque los pidieron que trabajaran por razones "morales", por un compromiso con el comunismo, los trabajadores resintieron las demandas de su tiempo y el deterioro de su nivel de vida, y expresaron su resentimiento, a falta de cauces institucionales para manifestar su descontento, con poca productividad en el trabajo, con lo que se provocó una gran crisis económica que fue objeto de mucho publicidad internacional. El gobierno, urgido de modificar su estrategia de acumulación, no sólo volvió a establecer los incentivos materiales y a ampliar el suministro de bienes de consumo, sino que concedió a los trabajadores más derechos de participación en las empresas, los sindicatos y la toma de decisiones del gobierno. Idealmente, por supuesto, los trabajadores deberían tener la libertad de organizarse. Sin embargo, en los países latinoamericanos, donde existen los derechos de organización y de huelga, los trabajadores rara vez han podido incidir significativamente en las políticas estatales ni han logrado obtener concesiones económicas y políticas como las que se lograron con los actos, al parecer no coordinados y con las quejas no expresadas públicamente, como las que obtuvieron los trabajadores cubanos a fines del decenio de 1960.

Los patrones (en Cuba, el estado) son probablemente más sensibles a las presiones "desde abajo" cuando los trabajadores, además de expresar de varias formas su inconformidad, ejercen una resistencia que provoca la repentina disminución de la productividad, o cuando no se dispone de fuentes alternativas de manos de obra (debido a las regulaciones de la misma, a los requisitos de capacitación o al pleno empleo), o cuando la represión para obligarlos a conformarse es demasiado costosa política o económicamente. En cambio, cuando los hurtos, la baja productividad y otras formas de resistencia callada persisten en niveles establecidos desde hace tiempo, es probable que los patrones toleren los costos en pro del aumento de sus utilidades o que traten de modificar las condiciones de trabajo en pequeñas dosis para inducir a una mayor productividad.

No sólo las condiciones de empleo industrial, sino también la pérdida de tal empleo pueden provocar protestas. Garretón señala, por ejemplo, que como muchos trabajadores chilenos perdieron sus empleos bajo el gobierno derechista de Pinochet, la base de las movilizaciones pasó de las "clases" a las "masas", es decir, del sector formal de la sociedad, más organizado, a los sectores económicamente más marginados. Estos se movilizaron, sin embargo, mediante grupos de vecinos, y no basados en el trabajo. En contraste, los trabajadores chilenos sindicalizados estuvieron relativamente tranquilos, a pesar de su historial de militancia. Esos trabajadores temían perder sus empleos si protestaban. Además, los militares fueron más capaces de regular la actividad de las organizaciones sindicales que las de la población en general, amorfa y no sindicalizada.

Sin embargo, el desafío de los trabajadores latinoamericanos no se ha confinado a los marcos urbanos. Marx sostuvo que las relaciones de producción hacían de los campesinos una fuerza política conservadora, pero estudios recientes sobre la revolución han mostrado que los campesinos no deben ser políticamente descartados. Marx observó (1959:338) que los campesinos hacen el mismo trabajo pero sin coordinación: en contraste con los obreros fabriles que trabajan hombro con hombro en actividades afines; los campesinos, según dijo, eran una "simple

adición de magnitudes homólogas, así como las papas en un saco forman un saco de papas". Es frecuente también que posean "los medios de producción", de hecho, si no de derecho. Independientemente de estas restricciones estructurales, los campesinos latinoamericanos han tenido un papel fundamental en las revoluciones mexicana, boliviana y cubana. Sin embargo, el papel del campesinado no debe exagerarse. Si bien las rebeliones agrarias en regiones de cada país contribuyeron a derrocar a los viejos regímenes, la propia "ubicación social" de los campesinos provocó una gran distinción entre lo que intentaban lograr mediante el desafío y lo que realmente lograron. En ningún país los campesinos derrocaron al estado por sí mismos. Hay que considerar que los campesinos ayudan más a "hacer" la revolución apoderándose de tierra, interrumpiendo la producción y creando desorden, que participando en movimientos inspirados por una ideología revolucionaria.

Pero incluso cuando los campesinos son aparentemente pasivos, respetuosos y tranquilos pueden, como dijimos antes, desafiar las condiciones que les desagradan reteniendo la producción y ocultando información esencial a sus superiores. Estas formas sutiles de desafío contra la explotación y el abuso son, sin duda, más comunes que la rebelión declarada. Por lo general, los campesinos sólo asumen los riesgos de la confrontación directa cuando perciben que la injusticia es intolerable, cuando lo que se exige de ellos aumenta súbitamente (y no de manera gradual) y cuando las condiciones institucionales y culturales locales y nacionales (que consideraremos más adelante) los inclinan a buscar remedio colectivamente.

Las quejas de los campesinos, sea cual fuera la forma en que se expresan, varían según las relaciones de propiedad y de trabajo. Por esta razón, las preocupaciones de los agricultores arrendatarios, los aparceros, los pequeños terratenientes y los jornaleros difieren. Los jornaleros rurales están preocupados por las condiciones de salario y de trabajo, los campesinos que tienen tierra, por los precios de los productos que comercian y por los bienes y servicios que consumen, y los agricultores que son arrendatarios de la tierra y los aparceros están preocupados por las demandas sobre su trabajo (o sobre el producto de su trabajo).

El impacto de los mecanismos de arrendamiento en la rebelión campesina es objeto de un gran debate. Wolf (1969) sostiene que la economía global devasta la economía moral del campesinado y radicaliza, en particular, al campesino medio. Paige (1975), en cambio, sostiene que los aparceros y los trabajadores migratorios son la base principal de los movimientos revolucionarios, debido a las condiciones específicas basadas en sus relaciones con los que no son cultivadores. Según Paige, las rebeliones agrarias van desde las protestas reformistas sobre los precios de los productos básicos y las condiciones de trabajo a los movimientos revolucionarios nacionalistas y socialistas, dependiendo de las combinaciones particulares en la organización de la tierra, el capital y los salarios. Cuando los ingresos de los cultivadores dependen de salarios y los ingresos de los que no cultivan dependen de la tierra, es muy probable que ese conflicto produzca movimientos revolucionarios. Tanto Wolf como Paige basan sus estudios en experiencias campesinas en todo el mundo durante el siglo XX.

La historia latinoamericana contemporánea indica que las quejas de los campesinos varían con las formas de tenencia de la tierra, pero que las dislocaciones económicas, y no los patrones de tenencia de la tierra mismos, alimentan la rebelión agraria. En el capítulo 4, Wickham-Crowley muestra, por ejemplo, que los movimientos guerrilleros (comenzados de manera característica por estudiantes educados) han obtenido mayor apoyo campesino en las regiones pobladas en gran número de aparceros, invasores de tierra y trabajadores migratorios. Sin embargo, el autor mencionado encuentra que las dislocaciones que socavan el sentido de seguridad de los campesinos, y no meramente las relaciones de clase rurales, contribuyen a la radicalización agraria. Es más probable que los campesinos involucrados en el cambio apoyen los movimientos revolucionarios que los campesinos que permanecen seguros en posesión de la tierra o que los jornaleros rurales cuando el capitalismo agrario ha estado asentado durante algún tiempo. De igual manera, en el capítulo 2, McClintock indica que el movimiento guerrillero Sendero Luminoso se aseguró una base campesina entre los pequeños terratenientes en la región de Ayacucho, Perú, a fines del decenio de 1970 y comienzos de los ochenta debido a una crisis de subsistencia que había allí; sus observaciones implican que las dislocaciones y las inseguridades que inclinan a los campesinos agrícolas a apoyar los movimientos guerrilleros pueden no ir de la mano con un cambio actual o potencial en los arreglos de tenencia de la tierra. Las demandas de tierra de los campesinos no fueron cuestionadas, pero el significado de la tierra para la subsistencia de los campesinos cambió. No obstante, el estudio de McClintock muestra también que las percepciones de los campesinos, y no sólo sus condiciones económicas objetivas, influyen en su disposición hacia los movimientos guerrilleros. El apoyo que Sendero Luminoso tenía en Ayacucho se desvaneció cuando Alan García, un carismático dirigente nacional izquierdista, empezó a prometer cambios.

Las respuestas rurales a las condiciones económicas pueden complicarse además por la diversidad de relaciones económicas que entablan los trabajadores de la tierra. Aunque varias relaciones de tenencia de la tierra y del trabajo de la misma son analíticamente diferenciables, los agricultores podrían verse involucrados en múltiples relaciones de trabajo. Por ejemplo, los campesinos con derechos comunales o individuales a la tierra pueden trabajar por tiempo parcial o por temporada como agricultores asalariados, ya sea dentro o fuera del sector agrario. Cabe esperar que aquellos que se encuentran en dos o más situaciones de trabajo respondan a las condiciones que les desagradan de manera diferente a aquellos que sólo se dedican a una. Los pequeños terratenientes que hacen trabajo suplementario por un jornal bajo pueden tolerar la explotación más que los trabajadores sin tierra. La participación misma de los agricultores en múltiples relaciones económicas debe verse como un modo de adaptación a las condiciones económicas insatisfactorias y como una respuesta estructurada que debe ser explicada. El impacto de la diversificación del trabajo y las condiciones en las que suele ocurrir se considerarán más a fondo a continuación.

#### Tensiones basadas en el mercado

Los estudios sobre la protesta de los trabajadores y, en menor medida, sobre la protesta de los campesinos han tendido a centrarse en conflictos basados en las relaciones de producción. Sin embargo, las relaciones de mercado pueden ser una fuente de tensión independiente.



Tanto la población rural como la urbana experimenta el mercado de dos maneras, al ser tanto consumidoras como productoras de bienes y servicios. Sin embargo, la capacidad para enfrentar las relaciones de mercado y cambiarlas a su favor, en cada grupo es distinta debido a que la influencia económica y política son diferentes. Las quejas basadas en el mercado también están estructuralmente enraizadas, pero en la sociedad en general, no en las condiciones existentes.

La fuerza de trabajo rural experimenta el mercado mediante interacciones con agentes del gobierno y empresarios, con inclusión de las personas que comercializan y gravan su producción y controlan su acceso al financiamiento. Así como los obreros fabriles perciben claramente a sus patrones y no al capitalismo en abstracto, como origen de sus problemas, también aquí el gobierno y los agentes privados son el blanco de la ira, no el mercado invisible o los burócratas distantes, de alto nivel, que hacen, pero no aplican, las políticas estatales que afectan las operaciones del mercado local. Los costos generados por tales agentes –por ejemplo los impuestos sobre la propiedad y el mercado y las tasas de la transportación- encolerizan particularmente a los pequeños terratenientes rurales que “poseen los medios de producción”, pues les provocan directamente mayores gastos. Debido a que estos pequeñoburgueses, a diferencia de la burguesía, tienen poco poder político y de mercado, es frecuente que no puedan hacer repercutir los nuevos costos sobre los consumidores de su trabajo mediante precios más altos. Por lo general, la competencia o incluso el propio gobierno, limitan la cantidad que pueden cobrar por sus bienes. Desde la segunda guerra mundial muchos gobiernos en la región han regulado los precios de los productos básicos, incluso en las economías de mercado, para mantener bajo el costo de vida de la población urbana que es más influyente políticamente.

Las tensiones basadas en el mercado están destinadas a ser cada vez más importantes en América Latina, ya que las relaciones, tanto de productores como de consumidores, se mercantilizan cada vez más, y que el empleo independiente orientado al mercado se expande. Simultáneamente, con el progreso del capitalismo agrario e industrial, el empleo por cuenta propia ha aumentado tanto en las ciudades como en el campo en gran parte de la región. La proletarianización no es la única consecuencia, y a menudo no es la consecuencia principal, de la “profundización” del capitalismo. Y, tal como acabamos de observar, los dueños de los “medios de producción” sufren directamente el impacto de las fuerzas del mercado. En las regiones rurales, la concentración de la tierra y la agricultura con gran intensidad de capital, combinadas con el crecimiento de la población, han creado una fuerza de trabajo sin tierra. Algunos de los trabajadores sin tierra con empleos como jornaleros en haciendas agrícolas, pero no la mayor parte. Para minimizar el tamaño de la población sin tierra en las regiones que no son adecuadas para una producción en gran escala de gran densidad de capital, los gobiernos han institucionalizado los derechos a la pequeña tenencia de tierra. Los gobiernos promulgaron reformas agrarias inicialmente sólo como respuesta a la presión revolucionaria “desde abajo”. Sin embargo, después de la revolución cubana, y en parte por presión de Estados Unidos, lo han hecho también para evitar movimientos radicales.

Sin embargo, la proletarización "incompleta" de América Latina no es sólo una consecuencia de la política estatal. Denota también la resistencia de los campesinos a perder el control de sus trabajos. Estos, con frecuencia, optan por dedicarse al comercio en pequeña escala que requiera un trabajo intenso y a la producción de bienes de consumo menores, en lugar de trabajar por un salario. Si bien de esta manera evitan el sometimiento directo a la explotación capitalista en su marco de trabajo inmediato, permanecen en extremo vulnerables a las fuerzas desfavorables y fluctuantes del mercado debido a su escaso poder dentro del mismo.

Las tensiones del mercado pueden estar basadas en procesos tanto globales como nacionales. El estudio de la protesta agraria hecho por Paige, el más sistemático, con bases cuantitativas y teóricas, que se han realizado hasta la fecha, se centra específicamente, por ejemplo, en el conflicto en el sector de exportación. Sin embargo, no analiza cómo la dinámica del mercado global moldea los movimientos agrarios independientemente del efecto que tiene en las relaciones de clase internas. Wickham-Crowley se basa en los argumentos de Paige para mostrar que el apoyo de los campesinos a los movimientos guerrilleros en el decenio de 1960 se concentró en lugares en donde una baja en los precios mundiales de un producto básico redujo la capacidad de los campesinos para obtener ingresos; no obstante, en el decenio de 1970 y comienzos del siguiente no ocurrió lo mismo. Las conclusiones de las observaciones de Wickham-Crowley son que las condiciones adversas del mercado global pueden atraer a los campesinos a los movimientos guerrilleros, pero que no siempre lo hacen. Las respuestas de los campesinos dependen de ciertos factores del contexto de los que hablaremos más adelante.

Buena parte de la literatura sobre las revoluciones supone que las transformaciones de estado y de clase resuelven los conflictos rurales, especialmente cuando los campesinos obtienen derechos legales a parcelas privadas, que son muy deseadas por ellos. Sin embargo, la propiedad de la tierra puede producir nuevas tensiones después de la revolución, debidas tanto a las políticas del gobierno como a la dinámica del mercado que los campesinos beneficiados con las reformas agrarias comienzan a experimentar directamente. Después de la revolución, las preocupaciones del campesino variarán, según cómo experimente el mercado, las políticas fiscales, crediticias y de precios del gobierno. Por ejemplo, no todos los campesinos que obtuvieron derechos a la tierra como resultado de la revolución de 1952 en Bolivia han permanecido tranquilos. Desde entonces han protestado cuando se han encolerizado por distintas circunstancias. Los beneficiarios de la reforma de la tierra han bloqueado las carreteras para privar a los habitantes de las ciudades de los productos agrícolas, para presionar a los transportistas y camioneros a fin de que no aumenten los precios del transporte y para presionar al gobierno a recovar los aumentos de precios de los alimentos básicos que deben adquirir. Los pequeños terratenientes bolivianos también han desafiado los reglamentos del gobierno y se han dedicado al contrabando y a la producción ilegal de coca (para la cocaína), que son lucrativos, ya que las ganancias son considerables; incluso han capturado y mutilado a funcionarios que obstaculizaban esas actividades. Su deliberado incumplimiento de la ley denota un esfuerzo por optimizar su propia ventaja económica, tal como la tesis racional campesina nos hace esperar (véase Popkin, 1979); estos campesinos no están naturalmente predisuestos al crimen y a los desórdenes. Sin embargo, su forma de desafío están en parte moldeada culturalmente. El bloqueo de carreteras, como ya dijimos, es propio del repertorio de protesta distintivo boliviano.

Incluso bajo el socialismo, la dinámica de mercado puede ser una fuente de conflicto. Cuando está prohibida la actividad económica privada, la presencia misma de actividad del mercado representa una forma de desafío callado a la ley; en este contexto, el conflicto no sólo está basado en las relaciones de mercado sino que la actividad del mismo expresa una protesta contra el estado o, para decirlo con más precisión, contra políticas específicas del estado. En Cuba, la participación del mercado ha variado con las opciones económicas oficiales. Por ejemplo, los pequeños agricultores, que se han encolerizado por los precios bajos que paga el organismo de compras del estado, han mantenido su producción baja o la han dirigido al mercado negro, que es más lucrativo. Fue evidente que su bajo productividad era deliberada y no el resultado de pereza o incompetencia cuando el gobierno mejoró sus (legítimas) oportunidades de mercado. La producción de los agricultores privados aumentó en seguida en los comienzos del decenio de 1980, cuando el organismo de compras del estado aumentó los precios que pagaba a los productores por sus cosechas y cuando el gobierno permitió a los cultivadores vender privadamente lo que producían, por encima de sus obligaciones con el estado.

En toda América Latina, la dinámica del mercado ha sido también una fuerte tensión en las ciudades. Puesto que los empleos urbanos que se pagan con sueldos y salarios no se han expandido a la par que la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo urbana, cada vez es mayor el número de ciudadanos así como de campesinos con tierra que buscan ganarse la vida con pequeñas empresas. Al igual que los pequeños terratenientes en el campo, estas personas tienen poco poder de mercado y, por ende, no pueden estructurar las relaciones del mismo en su favor. Las personas que trabajan por cuenta propia en las ciudades pocas veces desafían las condiciones que tienen que ver directamente con su situación de trabajo. En vez de esto, sus protestas se enfocan hacia el impacto económico que su escasa capacidad de ingresos tiene sobre su poder de compra. Estas personas han buscado, en particular, reducir los costos de los bienes y servicios que consumen.

Al igual que lo que ocurre en el campo, en la ciudad algunas protestas deben comprenderse en el contexto de la dinámica de mercado global y no meramente nacional. Por ejemplo, el capítulo 11 pone de manifiesto cómo los gobiernos latinoamericanos, agobiados por la deuda, han puesto en marcha programas de austeridad que eliminan los subsidios a algunos alimentos y transportes, han congelado los salarios (a pesar de la inflación) y han desmantelado las empresas estatales. Han hecho esto en gran medida por la presión de los acreedores extranjeros (sobre todo el FMI), aunque a menudo con el apoyo de, por lo menos, ciertos segmentos de la burguesía local. Los acreedores internacionales, que tienen presentes sus propios intereses, han condicionado sus préstamos a reformas cuyas consecuencias políticas tienen que sufrir los gobiernos latinoamericanos. Las medidas de austeridad han sido causa de manifestaciones callejeras, motines, huelgas, pillajes, reuniones políticas, ataques a edificios del gobierno y violencia en las calles, especialmente en las ciudades. Sin embargo, el desafío no ha estado determinado mecánicamente por las fuerzas y las instituciones económicas mundiales. Walton sostiene, en el capítulo 11, que las formas variadas de desafío no han sido puramente espontáneas, sino que han conllevado cierto grado de organización y que las protestas contra la austeridad tienen su propia economía moral; de manera muy semejante a la que tuvieron los motines ingleses que ocurrieron por el pillaje de alimentos en el siglo XVIII (Thompson, 1971). Los

que reclaman hacen patente que la austeridad no es socialmente viable ni justa. De manera característica, las protestas han sido producidas por aumentos súbitos de precios iniciados por el gobierno, que hacen mucha mella en la capacidad económica de la población urbana pobre que no puede atender a sus necesidades de subsistencia. La clase media asalariada, que ha tenido que hacer frente no sólo al aumento en el costo de la vida sino también al desempleo causado por las reducciones de personal en la actividad del sector público, no siempre ha aceptado calladamente su repentina pérdida de estatus y de medios de subsistencia.

En realidad, estas protestas basadas en el mercado resultaron más problemáticas para los gobiernos en el decenio de 1980 que las quejas basadas en la relación de producción. Estas últimas pudieron ser más fácilmente contenidas y contrarrestadas mediante una manipulación paternalista o burocrática de las relaciones entre el trabajo y la administración. Además, las fuerzas de mercado normalmente de escala global no pueden ser controladas en seguida por las élites locales que son en la arena internacional relativamente débiles.

De hecho, los gobiernos socialistas pueden ser más vulnerables al desafío de los consumidores urbanos que los gobiernos de los países capitalistas. Aunque los gobiernos socialistas pueden estar sujetos a menos presión directa de los financieros internacionales para reducir los subsidios de alimentos, tienen sus propias necesidades fiscales. A mediados del decenio de 1970, los países socialistas recurrieron al financiamiento de Occidente cuando las tasas de interés eran bajas y la demanda de sus exportaciones era bastante alta. Los préstamos se convirtieron en una fuente importante de financiamiento de capital, particularmente desde que permitieron a los gobiernos adquirir bienes y servicios occidentales. Sin embargo, cuando las tasas de interés subieron y los precios de las exportaciones cayeron en los últimos años de dicho decenio, los gobiernos en las economías socialistas, al igual que en las economías de mercado, incurrieron en grandes deudas con el Occidente. Para atender a sus necesidades fiscales ellos también se vieron obligados a reducir los subsidios proporcionados por el estado. Debido a que administran los precios de mayor cantidad de bienes y servicios que los gobiernos no socialistas, los cambios de precios afectan, de manera concomitante, a muchos más consumidores. Como ya dijimos, los cambios repentinos que golpean a mucha gente a la vez suelen despertar el desafío colectivo. En Polonia, por ejemplo, los precios se convirtieron en la clave del orden público en los comienzos del decenio de 1980. En Cuba, el gobierno evitó el problema durante casi dos decenios, manteniendo los precios de los bienes racionados en los niveles establecidos en los primeros años del decenio de 1960. Cuando finalmente el gobierno quiso reducir la carga fiscal del subsidio de alimentos, siguió una estrategia menos explosiva que la del régimen polaco. En lugar de limitarse a aumentar los precios oficiales de los bienes de consumo, los dirigentes de Castro permitieron que un número cada vez mayor de bienes fuera vendido al margen del racionamiento. Al privatizar y desregular las asignaciones distributivas, el gobierno cubano evitó convertirse en blanco de las revueltas de los consumidores, en contraste con el gobierno polaco; pero lo hizo a costa de los "principios distributivos socialistas". La apertura del mercado llevó graves distorsiones en el sector estatal restante y a tal grado de acaparamiento, a expensas de los consumidores, que el gobierno cerró los mercados privados a mediados del decenio de 1980. El sistema de distribución del mercado, regulado por el estado, resolvió algunos problemas, pero produjo otros.

La dinámica del mercado también creó problemas para el gobierno sandinista en Nicaragua. Sin embargo, allí el gobierno –hasta la fecha- se ha enfrentado más al desafío de las regulaciones comerciales que a las protestas de consumidores sobre los precios oficiales. Los esfuerzos del gobierno por hacer cumplir “los principios socialistas de distribución” han sido socavados por mediadores que buscan aprovecharse del comercio ilícito. La escasez ha llevado a un mercado ilícito provechoso, con consecuencias adversas para la producción promovida por el estado en la economía legal. Los comerciantes con licencia desafían los controles de precios y muchos nicaragüenses han dejado sus empleos en el sector productivo, o se ausentan de los mismos con frecuencia, para dedicarse al comercio no autorizado, pero más lucrativo. En vez de movilizarse en demanda de mayores salarios, lo cual es difícil, ya que los sindicatos están controlados por el gobierno, los trabajadores descontentos se dedican a la actividad comercial ilícita, difícilmente controlable. En consecuencia, los focos de conflicto han pasado de las “relaciones de producción” a la esfera de la distribución, y de la tensión entre el trabajo y el capital a la tensión entre una nueva burguesía pequeña (o pequeño burguesía de tiempo parcial) y el estado.

En los países capitalistas del tercer mundo la urbanización también ha provocado tumultos por el problema de la vivienda. Esto ha sido especialmente cierto en América, en donde la tendencia urbana contribuye a una migración masiva a las ciudades. El costo elevado de las viviendas profesionalmente construidas, que están comercialmente disponibles, ha llevado a muchos de los habitantes de las ciudades que tienen bajos ingresos a apropiarse de terrenos ilícitamente y en masa en las zonas suburbanas y a construir sus propias viviendas en los terrenos que ocupan. El fin del sistema de rentas congeladas también ha producido protestas en las zonas más antiguas del centro de las ciudades; esto ocurrió, por ejemplo, en Sao Paulo en 1987. La mayoría de las “invasiones” de terrenos están organizadas a menudo con el apoyo tácito de partidos políticos o funcionarios del gobierno. Aunque los organizadores de estas invasiones suelen instalarse en los terrenos después de que éstos han sido ocupados, es característico que los invasores sigan movilizándose después para obtener servicios para la colectividad, con inclusión de agua, electricidad, caminos, mercados y derechos legales sobre los terrenos.

Los residentes de los asentamientos urbanos de estos invasores, que cada vez son más, fueron típicamente descritos en los decenios de 1960 y 1970 como políticamente tranquilos, porque, por lo general, apoyan a los gobiernos en funciones y raras veces a partidos de izquierda (excepto allí donde, como en Chile con Salvador Allende, la izquierda estaba en el poder y organizaba las invasiones de terrenos). Pero la política radical no es la única ni la más frecuente expresión de desafío. El apoyo electoral que brindan los invasores de terrenos a los principales partidos, no debe oscurecer el hecho de que tales apropiaciones ilícitas son una expresión de desafío de los consumidores: una forma de protesta por el alto costo y la baja oferta de viviendas en el mercado habitacional formal. Los aspirantes a propietarios de una vivienda han colocado demandas de propiedad en desafío al mercado, cuyos precios por un techo van más allá de sus posibilidades.

Los gobiernos democráticos y no democráticos en los países capitalistas de la región han presentado algún tipo de resistencia a las invasiones de terrenos, aplastando con aplanadoras y quedando las chozas de los invasores y deteniendo y

atacando violentamente a los propios invasores que se negaron a abandonar el terreno. Sin embargo, también han tolerado muchas de las apropiaciones de terrenos, especialmente cuando han ocurrido en propiedades públicas. Los gobiernos han permitido estas invasiones por razones económicas y políticas. Económicamente, un techo barato les ha ayudado a mantener bajo el salario que los patrones deben pagar a los empleados para subsistir en la ciudad. Con ello han ayudado a la industrialización, que los gobiernos latinoamericanos han alentado desde la segunda guerra mundial. Políticamente, una posición permisiva logra aliados para los políticos entre la población urbana pobre; además, en el proceso de legitimar los reclamos de terrenos de los invasores, los funcionarios logran regular /y minimizar) los problemas en torno a los cuales los pobres se movilizan después (Eckstein, 1977).

Si bien las movilizaciones por una estrecha gama de bienes y servicios fueron la norma en el decenio de 1960 y comienzos del siguiente, la recesión de mediados del decenio de 1970 y comienzos del decenio de 1980 y las políticas represoras de algunos de los gobiernos en el poder, dieron lugar a nuevos tipos de movimientos urbanos. En unos pocos países –por ejemplo en Nicaragua, El Salvador, Chile y Perú- un gran número de pobres urbanos empezaron a apoyar a partidos de la izquierda y a las políticas distributivas que éstos defendían; sin embargo, incluso en países en donde no lo hicieron, los pobres urbanos comenzaron a movilizarse alrededor de nuevas cuestiones y su manera de desafío en ocasiones cambió. Las protestas contra el costo de la calidad de los bienes y servicios aumentaron, como cuando se pusieron en práctica programas de austeridad. Sin embargo, las asociaciones de vecinos también empezaron a romper con los gobiernos afianzados y a presionar por lo que consideraban derechos, no favores. En el norte de México y en la periferia de la capital del país los grupos de vecinos rechazaron deliberadamente la ayuda gubernamental para resistir la persuasión por parte del estado, prefirieron robar materiales y obtener ilícitamente el agua, la electricidad y otros servicios urbanos (Castells, 1983). Algunos grupos vecinales de bajos ingresos –por ejemplo en Chile, México y Brasil- incluso empezaron a presionar para que se aplicara una economía popular, en oposición a la patrocinada oficialmente (Portes y Johns, 1986): estos grupos se movilaron para la adquisición colectiva, la preparación y el consumo de alimentos, las mejoras colectivas a las viviendas y el cuidado colectivo de los niños. Queda por verse si estos movimientos autónomos y colectivistas se difundirán y si podrán lograr mucho en los sistemas de clase y políticos existentes.

### Conflicto étnico y racial

Aunque las injusticias arraigadas en las relaciones de clase y de mercado son las fuentes principales del conflicto contemporáneo en América Latina, en ocasiones la etnia y la raza han sido bases independientes de movilización en pro del cambio. Si bien la mayor parte de los movimientos de protesta raciales y étnicos están basados en quejas económicas, deberían considerar analíticamente distintos cuando entrañan sólo segmentos racial o étnicamente definidos de las clases socioeconómicas y cuando se centran en cuestiones étnicas y raciales y no mera o necesariamente en cuestiones de clase.

En América Latina la raza y la etnia tienden a definirse en términos sociales y culturales, no en términos biológicos. Por consiguiente, muchos han supuesto que la importancia de la raza y de la etnia desaparecería en cuando los indios y los negros aprendieran el español el portugués, vistieran ropas de estilo occidental, se trasladaran a las ciudades y tuvieran empleos en el sector moderno. Sin embargo, incluso cuando tal asimilación cultural y tal integración social han ocurrido, los latinoamericanos se han movilizado según líneas étnicas y raciales y han ejercido presión para tener derechos étnicos y raciales. Esto ha ocurrido en gran medida cuando gente con distintas identidades culturales y distintos rasgos físicos también fue socialmente segregada (de hecho, que no de derecho en América Latina), cuando sufrieron privaciones como grupo y cuando los controles sociales establecidos se derrumbaron. Sin embargo, los cambios en la posición absoluta o relativa de los grupos étnicos por escasas posiciones privilegiadas son los que impulsa a estos movimientos y no la privación per se. Por ejemplo, en las tierras altas y pobres de Bolivia, durante el decenio de 1980, los campesinos que lucharon violentamente al terminar el siglo por intereses de clase –por la devolución de las tierras comunales que les habían quitado- ejercieron presión por los derechos de los aimará (incluso mediante sus propios partidos políticos). El movimiento de base étnica ganó impulso porque varios factores concomitantes (con inclusión de otro tipo de factores de contexto que conforman el desafío, como adelante mostraremos): los campesinos de la región sufrieron un deterioro de su situación económica, y la migración se convirtió en una opción menos viable debido a una severa recesión económica nacional; una apertura democrática, bajo el gobierno de Siles Zuazo, hizo posibles las movilizaciones de grupos en la sociedad civil; los miembros de la intelligentsia urbana apoyaron el movimiento, y un dirigente carismático que había quedado inválido en luchas anteriores con un gobierno militar hizo un llamado a la herencia étnica de los campesinos de la región. En Guatemala, la tensión con base racial entre indios y ladinos se ha hecho más patente en las últimas décadas, y ha unificado a los grupos indios anteriormente divididos y separados; esta tensión aumentó cuando la producción orientada al mercado socavó las relaciones rurales existentes. En Brasil, a su vez, los negros se movilaron en contra del dominio racial, cultural y social en el decenio de 1970, a pesar de (y, en parte, debido a) las afirmaciones de la sociedad de ser una democracia racial; sus movilizaciones aumentaron al mismo tiempo que la oposición al gobierno militar cobraba impulso.

Es relativamente poco lo que se sabe de estos y otros movimientos raciales y étnicos, en parte debido a que en América Latina las consecuencias son menores que en otras regiones del mundo, pero también porque la ideología dominante en América Latina oscurece este asunto. Puesto que se afirma que la raza es un fenómeno social y cultural, no biológico, se supone que las privaciones son un problema individual, no de grupo; supuestamente la gente puede “pasar” si adopta la cultura y participa en la vida institucional de la nación. Esta ideología ha influido en gran parte del pensamiento sociológico acerca de este asunto: en particular, sobre los análisis establecidos con base en la premisa del paradigma de modernización, que dominó en la literatura de Estados Unidos a mediados del decenio de 1970. Los análisis marxistas no adolecen del mismo reduccionismo individual, pero el énfasis marxiste en la solidaridad de clase y en el conflicto de clases no proporciona una base analítico para comprender cómo, cuando y por qué las identidades raciales pueden volverse significantes por derecho propio. Este es, sin duda, un tema sobre el cual hace falta más teoría y más trabajo empírico.

La resistencia basada en el género

Los intereses de la mujer se definen por una combinación de su posición de clase individual y familiar en la economía, y por su posición dentro de la familia tal como lo determina la división del trabajo en el hogar. Como es bien sabido, la mujer ocupa una posición subordinada en la familia, y, en general, si trabajo, también en la economía. Las mujeres no sólo sufren porque tienen condiciones subordinadas en ambos marcos, sino también porque los hombres usan sus posiciones dominantes en provecho propio (Bourque y Warren, 1981). Por lo general, los hombres controlan el acceso a los recursos fundamentales y a las justificaciones culturales de por qué debe ser así.

El aislamiento de las mujeres en el hogar, y su marginación económica han contribuido supuestamente a su inmovilidad. No obstante, ellas desafían con frecuencia el dominio de los hombres sin confrontarlos directamente. Su posición débil dentro de la familia y la economía limitan sus posibilidades de maniobra, pero pueden socavar en cierta medida la autoridad masculina mediante el chismorreo, la calumnia y el poder informal que ejercen en la esfera del hogar (Lamphere, 1974).

En América Latina, la marginación económica de la mujer tiene algunos efectos económicos y políticos positivos en los hogares, aunque no en su posición dentro de la familia. Esto ha sido especialmente cierto en los asentamientos ilícitos de invasores de tierras. Muchas mujeres en estos asentamientos permanecen en sus vecindarios durante el día mientras sus hombres trabajan en otros lugares, tanto porque son responsables de los niños y del hogar como porque están limitadas en sus opciones de empleo. Por consiguiente, pueden defender los derechos familiares a la tierra. Las mujeres pueden ayudar a rechazar a la policía, a los inspectores fiscales y a otros agentes del estado. En la ciudad de México, por ejemplo, las mujeres de las barriadas más pobres han protegido a su comunidad incluso con la violencia física, contra los urbanizadores que quisieron desalojar a sus familias y contra la policía que intentó detener a participantes de una organización local (Vélez-Ibáñez, 1983:119-122). En Sao Paulo, a su vez, las mujeres a cargo del consumo hogareño constituyeron la fuerza principal en el Movimiento por el Costo de la Vida y en los esfuerzos por crear grupos comunales de compra en los últimos años del decenio de 1970 (Singer, 1982).

Estas mujeres en los asentamientos de invasores defienden los intereses del consumo basado en la clase. Sin embargo, en los decenios de 1970 y 1980 las mujeres de clase diferentes se unieron también debido a la similitud de intereses compartidos, incluyendo los derechos a la maternidad. Amas de casa, pobres y ricas por igual, han desafiado públicamente a los gobiernos militares en Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala, que secuestraron y mataron a sus hijos y nietos. También en estos casos la marginación económica de la mujer fue un factor en su movilización. Debido a que las mujeres que tienen empleo son menos que los hombres, tienen más tiempo que sus parejas para buscar a los niños que "han desaparecido"; y no se exponen a ser despedidas del trabajo por desafiar al régimen, como puede sucederles a sus cónyuges empleados. Además, la marginación política previa de las mujeres ha funcionado en su propio beneficio, ya que no fueron tan sospechosas cuando se movilizaron políticamente por primera vez.



Evidentemente, los hombres comparten con las mujeres su preocupación por los niños. Sin embargo, en América Latina, en donde se glorifica la maternidad y la mujer es exaltada como un ser doméstico –como se refleja en el Marianismo, la contraparte del machismo (Stevesns, 1973)- las mujeres sufren un sentido de pérdida particularmente intenso cuando sus hijos “desaparecen”. En esas circunstancias, la maternidad crea un vínculo y un sentido de solidaridad, del cual las mujeres han sacado la fuerza necesaria para desafiar las prohibiciones de protestar y para desafiar, en efecto, la legitimidad de los regímenes represivos.

El movimiento de mujeres sin ninguna experiencia política que se unieron en defensa de los “desaparecidos” fue particularmente eficaz en Argentina. Allí las mujeres protestaron como se describe en el capítulo 8 cuando pocos hombres osaron hacerlo. Los militares argentinos intentaron disolver el movimiento y desacreditarlo. Sin embargo, las manifestaciones callejeras persistentes, silenciosas y no violentas de las mujeres, así como sus huelgas de hambre contribuyeron a derrocar al gobierno represivo, especialmente después de que se perdió la guerra con el Reino Unido por las Islas Malvinas, hecho que desacreditó gravemente a las fuerzas armadas.

Estos ejemplos ilustran que, analíticamente, el género puede tener importancia de dos formas distintas: como una base social de movilización y resistencia y como un conjunto de cuestiones acerca de las cuales hombres y mujeres pueden reunirse para presionar a favor de un cambio. Por supuesto, las dos maneras pueden estar relacionadas concretamente. Sin embargo, si las mujeres se movilizan a menudo por cuestiones que atañen a los hombres y a los hogares, es muy poco frecuente que los hombres se movilicen por cuestiones tipificadas como de mujeres. Si alguien lucha por los “asuntos de las mujeres” suelen ser sólo ellas.

Desde un punto de vista analítico, los movilizaciones de las mujeres en defensa de sus demandas de vivienda y otras de consumo, así como en defensa de “los desaparecidos” instan a otra revisión importante de las ideas marxistas ortodoxas. Como hemos visto, la no participación de la mujer en el proceso de producción ha hecho que sea más fácil para ellas desafiar el orden establecido; Marx, como sabemos, supuso que las semillas de la protesta estaban, sobre todo, en los intereses opuestos dentro de las relaciones de producción.

#### El desafío de base política

Las protestas antigobierno realizadas por los familiares de los desaparecidos en Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala no sólo muestran que las mujeres pueden resistir colectivamente a las condiciones que les disgustan, sino también que las instituciones y los procesos políticos pueden ser causa de quejas y blando del desafío, independientemente de las tensiones basadas en las clases o en el mercado. La protesta política puede estar basada en el deseo de los grupos políticamente excluidos de ser incorporados en el cuerpo político; en el descontento

entre grupos emancipados con los mecanismos políticos existentes, y en la oposición a la manera en que se ejerce el poder político como se muestra en políticas estatales específicas. Por estas razones, el desafío político puede buscar un cambio en la esfera política y en otras esferas institucionales.

Las luchas que se centran explícitamente en los derechos y en la justicia políticos, suelen volverse más intensas y tener una base más amplia cuando los grupos también se sienten económicamente agraviados y cuando el desempeño económico del régimen es cuestionable. Tilly (1978) añade que el conflicto político es especialmente probable cuando cambia el equilibrio de los recursos económicos, militares y de organización entre los grupos. Al parecer, los cambios en el control de recursos simbólicos ideológicos también pueden tener importancia, y los cambios críticos en el equilibrio de los recursos que despiertan el desafío de las "masas" pueden centrarse en el nivel de la élite (no entre las élites y las "masas").

El descontento con los mecanismos políticos puede ser expresado mediante un desafío extrainstitucional y la participación en movimientos izquierdistas que desafían el statu quo. Sin embargo, también puede ser expresado no participando deliberadamente en las elecciones, destruyendo boletas electorales y negándose a participar en actividades políticas y cívicas. Lo que se ve como apatía puede denotar un descontento silencioso con las opciones políticas existentes y un desafío a las mismas. En la medida en que esto sea cierto, la base potencial para el cambio político es mucho mayor de lo que las quejas políticamente expresadas sugieren.

La historia latinoamericana del siglo XX, como dijimos, ha estado marcada por oscilaciones entre gobiernos militares y gobiernos democráticamente elegidos. Si bien los ciudadanos han aceptado con frecuencia, aunque a regañadientes, su pérdida de derechos políticos como resultado de golpes de estado, estos derechos se han convertido luego, con frecuencia, en motivo de movilizaciones políticas. Los capítulos 9 y 10 documentan cómo ricos y pobres se han lanzado a la calle para hacer presión juntos para el restablecimiento de los derechos electorales y otros derechos políticos.

Incluso cuando el pueblo tiene derechos políticos formales, el conflicto no se encausa siempre por vías rutinarias políticamente legítimas. Es posible que los derechos formales inciten a protestar si los ciudadanos creen que las elecciones fueron fraudulentas o las opciones electorales limitadas. Especialmente cuando los estados son débiles y los grupos civiles están politizados, como ocurre en Bolivia, la manipulación electoral de los partidos políticos gubernamentales se ha topado con protestas públicas. En 1978, por ejemplo, los campesinos se negaron a permitir que los candidatos (de derecha) apoyados por el gobierno se presentaran en público. También establecieron el bloqueo de carreteras y lucharon contra la policía y los soldados que intentaron detener a los que se oponían al gobierno. Aunque las opciones políticas mejoraron luego, siete años después las elecciones también fueron perturbadas por el desafío de "masas". Los dirigentes campesinos amenazaron con trastornar la economía nuevamente con los bloqueos de carreteras para marcar su oposición a las elecciones; los campesinos creyeron que el gobierno intentaba debilitar su voto al no facilitar adecuadamente el registro de electores rurales. Incluso en México, en donde es más fuerte y los grupos de la sociedad civil

son más débiles, las elecciones suscitaron protestas violentas y no violentas en el decenio de 1980, especialmente (aunque no sólo) en la región industrial del norte. Puesto que la crisis económica de la nación hizo que el nivel de vida cayera, la clase media, así como los pobres (por razones algo diferentes) se volvieron menos tolerantes a la corrupción del gobierno y al fraude electoral.

El desafío electoral tiene una historia particularmente larga en Argentina. Allí los ciudadanos han expresado calladamente durante decenios su oposición a las opciones políticas en las urnas electorales. Este desafío electoral culminó en 1960, cuando aproximadamente en 20% de todos los que votaron lo hicieron "en blanco". Muchos de estos votantes que optaron por "desperdiciar" su voto eran peronistas, éstos resentían el hecho de que su partido hubiera sido proscrito y dejaron constancia de su resentimiento en las urnas.

El uso deliberado de la boleta electoral como un instrumento de desafío político se ilustra también en la región peruana de Ayacucho, cuando Sendero Luminoso tenía una fuerte base allí. En los comienzos del decenio de 1980 la mayor parte de los campesinos se abstuvo de votar, anuló sus boletas o votó en blanco como expresión de su hostilidad por las opciones políticas. Los militantes en la guerrilla vieron en el sufragio una institución importante que desafiar, y los simpatizantes en la región contribuyeron a socavar la legitimidad del estado al negar apoyo electoral en 1985, cuando el candidato izquierdista a la presidencia, Alan García, les dio motivos de optimismo.

Aun cuando algunas condiciones, tradiciones e historias algo distintas han dado lugar a variaciones en las expresiones de desafío de base política en los países latinoamericanos, en toda la región las mismas clases socioeconómicas han tendido a expresar sus quejas políticas de maneras bastante parecidas, tanto bajo regímenes democráticos como no democráticos: los grupos económicamente subordinados protestan en las calles con más frecuencia, pues su capacidad para influir en la toma de decisiones por canales políticos formales o no agresiones es limitada, a pesar de la fuerza que tienen por su número. En América Latina el poder real pocas veces se confiere a las instituciones políticas formales, y aun cuando los campesinos, trabajadores y los pobres urbanos tienen derechos políticos formales, carecen de acceso a los canales de influencia informales eficaces.

Los empresarios y otros segmentos de la llamada clase media (que en América Latina están entre los de más altos ingresos) raras veces se lanzan a la calle porque, por lo general, pueden confiar, tras bambalinas, en canales políticos de influencia informales y eficaces, a los que las clases "populares" no tienen acceso. Sin embargo, cuando los grupos de élite no pueden defender sus intereses por medios formales o informales, ellos también tienen que lanzarse a la calle: por esta razón, las movilizaciones contra los militares en Brasil y en Chile tuvieron cierto apoyo de la clase media.

Sin embargo, las clases medias no sólo protestan en pro de la democracia. En algunas ocasiones han desafiado a la democracia hasta el punto en que han

apoyado los golpes de estado militares, y, en casos extremos, han financiado a sus propias milicias. Las clases medias han apoyado a los golpes de estado autodemocráticos y a las milicias cuando la democracia no pudo, a su juicio, limitar de manera suficiente las demandas de los trabajadores y la clase baja. Aunque las clases medias tienden a estar favorablemente dispuestas a la democracia, han sacrificado sus derechos políticos cuando sus intereses económicos se han visto amenazados. Por consiguiente, los cambios en la dinámica de clase y en las condiciones económicas explican por qué los mismos grupos de clase media que hicieron presión para la instalación de la democracia en Brasil y en Chile en el decenio de 1980, apoyaron las usurpaciones ilícitas del poder por parte de los militares en el decenio de 1980, miembros de la burguesía desafiaron a la democracia hasta el punto de financiar los escuadrones de la muerte, de derecha. Hicieron esto para subvertir las reformas sociales moderadas del gobierno y para sofocar un movimiento de guerrilla de amplia base que amenazaba sus intereses de clase.

Aunque el desafío político oculta con frecuencia quejas económicas fundamentales, la "autonomía relativa" de los políticos provoca, en ocasiones, que las clases se vuelvan en contra de ellas mismas. En las sociedades estructuradas jerárquicamente –que es lo que los países latinoamericanos han sido históricamente– las contiendas electorales pueden hacer que facciones de clase se enfrenten cuando las propias élites están divididas; esto puede suceder incluso cuando las quejas económicas basadas en la clase están en la raíz de la politización. El ejemplo latinoamericano más notorio de lucha intraclase ocurrió en Colombia en el decenio de 1940 durante el llamado período de La Violencia, cuando los campesinos, muchos de los cuales habían sido económicamente desarraigados durante la depresión, se enfrentaron entre sí en apoyo al partido político al cual estaba afiliado su patrón.

En suma, el desafío de base política ha sido expresado de diversas maneras, que van desde la actividad guerrillera, el apoyo a los partidos de izquierda y el desafío público a la ley hasta las actividades más sutiles y encubiertas que incluyen el equivalente político de la haraganería y el sabotaje electoral. Los grupos socioeconómicos tienden a expresar sus quejas de manera políticamente diferente, debido a los distintos canales de influencia real que tienen a su disposición; las clases medias recurrirán a las mismas tácticas de desorganización que los pobres cuando les fallan los canales formales e informales de influencia. Sin embargo, la falta de un desafío políticamente expresado no necesariamente significa satisfacción con los mecanismos políticos ni la probabilidad de que la tranquilidad sea continua. Las personas que están políticamente descontentas pueden pensar que los costos de expresar ese descontento públicamente son demasiado grandes. Cuando perciben los riesgos, pueden recurrir a expresiones de desafío encubiertas o retirarse de la política y negar que el régimen tenga legitimidad electoral. Las clases "populares" no necesitan incentivos selectivos, como la teoría de la opción racional plantea, para desafiar los mecanismos políticos de maneras silenciosas. Centrarse tan sólo en las expresiones de desafío manifiestas da una impresión falsa de apoyo y legitimidad del régimen.

La religión: no sólo un opio

Se ha pensado que la religión era un atavismo que probablemente desaparecería con la modernización, epifenomenal y una alternativa irracional de la política. En los decenios recientes nuevos valores religiosos y una nueva actividad religiosa han producido conflictos no sólo dentro de las jerarquías religiosas sino también en las sociedades en las que están enclavadas.

En América Latina, la Iglesia católica ha sido uno de los pilares del orden establecido durante siglos. Ya no es siempre así. Desde el decenio de 1960 las comunidades eclesiales de base (CEB) POPULARES, INSPIRADAS POR LA "TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN", BASADA EN EL Concilio vaticano II, han alimentado el desafío, han contribuido a una deslegitimación de las estructuras y de los dirigentes establecidos y han sentado una base para nuevos tipos de dirigentes y para otras formas de solidaridad. Al hacerlo, han creado una tensión en el seno de la iglesia misma, nacional e internacionalmente, y en las formas locales de gobierno (Levine, 1986).

La nueva teología hace hincapié en las cuestiones de justicia y de igualdad y llama a una "opción preferente por los pobres". Por consiguiente, sus partidarios ven los valores y los símbolos religiosos como una razón para que la gente pobre se movilice contra las estructuras sociales inmorales. Las injusticias, que otrora se dijo que estaban divinamente ordenadas, se describen ahora como inventos sociales que pueden ser modificados. La nueva teología ha arraigado especialmente allí donde las dislocaciones económicas han preparado el terreno desmantelando los lazos sociales tradicionales entre las clases; esto ha ocurrido especialmente en América Central, pero también en Chile y en Brasil.

La naturaleza de las participaciones de las CEB varía considerablemente según el país, aun cuando los grupos están basados en la misma doctrina religiosa y en la misma organización jerárquica. Las CEB han sido una fuerza detrás de las protestas contra políticas injustas, como los programas de austeridad en la República Dominicana (véase el capítulo 11), los movimientos revolucionarios en Nicaragua y en El Salvador y la presión masiva por la democratización en Brasil, Chile y Haití. Sin embargo, en otros marcos han reforzado y fortalecido a los regímenes conservadores. Levine y Mainwaring sostienen, en el capítulo 7, que las participaciones de las CEB varían según las interpretaciones de la doctrina religiosa por el clero y su papel sociopolítico por una parte, y según las relaciones entre la iglesia y el estado por otra.

Las CEB ejemplifican los vínculos entre la protesta y la organización. Algunas veces, las organizaciones populares de las CEB incitan al desafío, al refutar teorías que plantean que la desorganización florece cuando no hay organizaciones intermediarias. Las CEB ofrecen un nexo institucional por el que la gente con las mismas privaciones se reúne regularmente, reconoce que sus problemas son compartidos y, en ocasiones, intenta cambiar su suerte. Además, la gente puede ser movilizada mediante sus participaciones con las CEB aun cuando no se afilien inicialmente con este fin. Además, las CEB se han convertido en un lugar importante en donde las personas laicas han desarrollado la capacidad de dirección, especialmente en aquellas sociedades en donde la organización en la sociedad civil está restringida. Esto ocurrió especialmente en Nicaragua bajo Somoza.

El clero ha sido un crítico principal de los regímenes represivos en la región. Ha desafiado a los gobiernos cuando muy pocos osaban hacerlo, porque su vocación sagrada les daba cierta inmunidad contra este abuso "mundano". No obstante, a medida que el clero participa cada vez más en la esfera de lo "profano", parece estar perdiendo algo de su aureola sagrada. Aun cuando el clero que habló contra la tortura y la represión en Brasil y en Chile entre mediados del decenio de 1960 y mediados luego del decenio de 1970 sufrió represalias mínimas, el arzobispo Romero fue asesinado luego en San Salvador mientras pronunciaba un sermón, y otros sacerdotes y misioneros fueron asesinados en El Salvador y en Guatemala.

Las CEB no representan meramente una respuesta basada en la iglesia a las injusticias en la sociedad civil. Representan una respuesta a una crisis dentro de la iglesia misma. Debido a que la iglesia no había respondido lo suficiente por sus miembros en los decenios recientes, la participación laica en la vida de la iglesia había disminuido. En número cada vez mayor los católicos se pasaban al protestantismo y la jerarquía tenía dificultades para reclutar sacerdotes. Los católicos, en esencia, expresaban su insatisfacción con la iglesia con sus posturas; no confrontaron directamente a la jerarquía y demandaron un cambio. En aquellas circunstancias, la jerarquía vio a las CEB como un medio de fortalecer su base en el nivel popular. Sin embargo, algunas CEB se han convertido en fuerzas por sí mismas, cuestionando la jerarquía y las creencias de la iglesia por una parte, y, por otra, presionando por un cambio en diversas esferas institucionales.

La gran mayoría de los latinoamericanos siguen considerándose católicos, participen o no en las CEB o en las actividades más tradicionales de la iglesia. Sin embargo, el protestantismo ha estado ganando gran número de conversos en los últimos decenios y ha hecho sus mayores progresos allí donde las dislocaciones económicas han debilitado los patrones de autoridad y de control y donde la Iglesia católica no ha respondido a las condiciones cambiantes. Los latinoamericanos se han vuelto hacia el protestantismo quizá más por su insatisfacción con la vida bajo el orden establecido que por su comprensión de la nueva doctrina religiosa y por una creencia en su superioridad, o al menos en la misma medida. Los conversos de las clases bajas, en particular, con frecuencia saben muy poco sobre el contenido de su recién adquirida filiación. Sin embargo, su nueva religión es generalmente muy significativa para ellos. El protestantismo, como religión minoritaria en la región, es sectario en su estructura y su mentalidad.

Aunque el protestantismo representa un desafío religioso a la hegemonía católica en la región, su impacto político tiende a ser conservador. Puesto que su orientación es hacia "el otro mundo", es tolerante de las injusticias sociales de "este mundo". Además, algo de la obra misionera ha sido financiada por grupos conservadores de Estados Unidos y ha servido como un vehículo para implantar criterios anticomunistas y religiosos estadounidenses (Hvalkof y Aaby, 1981).

Sin embargo, la importancia política de la religión no sólo depende de las doctrinas que los grupos abrazan. Tanto los protestantes como los católicos han sido agentes del cambio cuando han cuestionado los patrones de dominio establecidos por largo tiempo. Por ejemplo, en las tierras altas de Guatemala, los misioneros católicos y protestantes por igual han roto el dominio del catolicismo popular y el orden social que éste legitimaba (véase Brintnall, 1979). El orgullo que acompañó la conversión fomentó el cambio. Los conversos indígenas fundaron ligas de campesinos, cuestionaron el dominio político de los ladinos y rompieron con la estructura indígena de poder civil-religioso. Vemos aquí cómo el impacto de la religión en la sociedad descansaba no mera o necesariamente en su contenido manifiesto, sino – como Weber sostuvo – en las predisposiciones que inspiró. Sin embargo, la nueva religión cautivó los corazones y las mentes de los indios sólo cuando los cambios nacionales y locales les proporcionaron nuevas oportunidades económicas; los esfuerzos misioneros anteriores habían fracasado. Las revueltas religiosas que transforman las relaciones sociales parecen tener más probabilidades de surgir cuando el viejo orden ya ha empezado a cuartearse.

Precisamente debido a que el impacto de la religión radica no sólo en su contenido manifiesto, incluso las secuelas religiosas populares han servido como fundamento para desarrollar movimientos de protesta y de resistencia. Los cultos indígenas que sobrevivieron a la conquista y a la occidentalización, adaptándose a las características cristianas y modernas e incorporándolas, no ofrecen ningún mandato explícito para el desafío político. Sin embargo, tal como June Nash lo documenta, las prácticas populares pueden mantener un espíritu de desafío vivo cuando reúnen a gente de la misma posición social; en las condiciones que se describen más adelante, estas culturas de resistencia pueden contribuir a la protesta política aun cuando la gente no participe en los rituales con tal fin. En Brasil, los movimientos afroamericanos se basan igualmente en los restos de las religiones africanas que los antiguos esclavos trajeron consigo. Incluso la Revolución cubana dominada por el marxismo no ha obliterado el poder de las creencias de raíz africana. Las religiones sincréticas que implican resistencia cultural al dominio blanco han desempeñado un papel particularmente importante en los movimientos con bases racial y étnica que hubo en la región.

En resumen, en los decenios recientes las instituciones y los valores religiosos han alimentado el desafío, deliberadamente o no. La insatisfacción con el catolicismo, que durante siglos fue la fuerza religiosa hegemónica en América Latina ha adoptado muchas formas. Algunas veces la iglesia ha respondido de una manera que le ha hecho ganar de nuevo la lealtad de los laicos. Al hacer que los laicos participen más en las actividades de la iglesia, y al modificar con ellos las relaciones dentro de las instituciones religiosas, la iglesia se ha convertido, en ocasiones, en el lugar de movilización para el cambio también en otras esferas institucionales: la jerarquía no ha sancionado necesariamente dicha actividad “de este mundo”, aun cuando ha sido apoyada por sacerdotes en el nivel local. La importancia de la religión deriva de los significados que sus seguidores dan a sus sistemas de creencias; estos significados no están determinados meramente por el contenido formal de la religión.

FACTORES DE CONTEXTO QUE MOLDEAN LAS RESPUESTAS A LAS QUEJAS

Las relaciones de clase y de mercado, el género, la política y la religión pueden ser causas de ira, pero hemos visto que las maneras en que se expresa el descontento pueden variar de manera considerable. Las pruebas históricas indican que las estructuras institucionales locales y los entornos culturales, los lazos y las alianzas entre las clases y las opciones vislumbradas condicionan si las quejas compartidas llevan al desafío y a la resistencia y la forma en que esto se realiza. Sólo cuando "las condiciones estén listas" la gente protestará públicamente en masa contra las condiciones que considera injustas.

#### Relaciones institucionales locales, alianzas de clase y culturas populares de resistencia

Cuando las instituciones reúnen a la gente en situaciones estructuradas de manera parecida, es probable que los individuos sientan que sus quejas privadas son compartidas colectivamente y pueden resolverse también colectivamente de la misma forma. El desafío colectivo es una respuesta particularmente probable a las quejas compartidas si los rituales y las creencias "populares" refuerzan una cultura de resistencia. En tales circunstancias, es probable que las personas descontentas recurran a estrategias de adaptación colectivas y no individuales; esto ocurre particularmente cuando –como detallaremos más adelante– las condiciones macropolíticas son también conducentes.

Los agricultores que mantienen lazos mediante instituciones culturales y sociales basadas en la comunidad, y no mera o incluso necesariamente mediante la producción, tienden a percibir cuáles quejas son compartidas. Cuando más se fortalecen los lazos sociales y culturales y cuanto mayor es la historia de protesta comunitaria sobre la que es posible basarse, más probable es que los aldeanos comprendan un desafío colectivo. Aunque se cree ampliamente que el capitalismo agrario socava la solidaridad de los pueblos, las relaciones de mercado pueden crear nuevos recursos que refuerzan a las instituciones locales allí donde los lazos ya son fuertes y donde los individuos que comparten quejas comunes están vinculados por lazos de parentesco, étnicos y culturales. Cuando, además, las comunidades están diferenciadas social y económicamente en dos campos distintos, es probable que las injusticias que se comparten se resistan colectivamente. En cambio, cuanto más compleja es la estructura de clases, menos probable es que las quejas se perciban como compartidas colectivamente y puedan corregirse también en colectividad. Cuando los lazos de parentesco, de patronazgo y rituales cortan transversalmente las líneas de clase, la solidaridad colectiva es rara.

En los lugares en donde la solidaridad del pueblo es fuerte, los miembros de la familia que migran para resolver problemas basados en la clase y en el mercado pueden reforzar involuntariamente los lazos culturales e institucionales, a la vez que recurren a soluciones individuales y hogareñas para las situaciones consideradas intolerables. Por ejemplo, cuando la presión de la población es grande, algunos miembros de la familia pueden migrar, pero regresan para las fiestas, los rituales y las épocas con gran demanda de mano de obra del ciclo agrícola. De esta manera, mantienen los lazos con sus antiguas comunidades y contribuyen a su base económica y social. Además, los migrantes reducen la presión sobre la tierra, que, de otra forma, podría dividir a la comunidad. Sin



embargo, al regresar con ideas urbanas pueden inducir al descontento del pueblo con su statu quo. Los migrantes que buscan soluciones privadas a sus problemas socioeconómicos pueden ser la chispa que prende la llama de la lucha basada en el pueblo, a la vez que refuerzan la solidaridad del mismo. Wolf (1969:292, 294) sostiene que el campesino medio tiene un papel esencial en las revoluciones precisamente porque conserva un pie en la vida del pueblo al mismo tiempo que los miembros de su familia migran y están expuestos a las ideas política e industriales urbanas. Según este autor, es el intento mismo de los campesinos por mantener sus tradiciones lo que los hace revolucionarios, con los habitantes de los pueblos que desfogan su fuerza hacia fuera para obtener más espacio vital para su modo de vida colectivo acostumbrado.

Las estructuras pueblerinas diferentes explican las respuestas distintas de los campesinos a los abusos y a la explotación (véase Skocpol, 1979; Wolf, 1969; Migdal, 1974). En el contexto latinoamericano, estas estructuras han conformado los movimientos revolucionarios y han influido en la manera en que la gente quejosa del campo ha respondido a las "situaciones revolucionarias". La rebelión campesina de Zapata se centró en la región de México en donde la vida colectiva de pueblo prevalecía y sus seguidores lucharon por el restablecimiento de los derechos colectivos a la tierra y la preservación de sus comunidades. La economía azucarera había corroído a las comunidades cubanas orientadas "hacia dentro" mucho antes de que Castro organizara su movimiento de guerrilla rural. Por consiguiente, el apoyo rural que recibió Castro provino de los invasores de tierras campesinos a los cuales les prometió derechos individuales a la tierra; Castro basó su movimiento guerrillero en una zona en donde la seguridad de la tierra era un problema, pero el capitalismo agrario no había proletarizado a la fuerza de trabajo.

Las estructuras de los pueblos pueden contribuir a actos de desafío colectivos incluso después de la revolución, especialmente cuando la solidaridad de clase está reforzada por la transformación del estado y de las clases. Por ejemplo, el movimiento aymará en las tierras altas de Bolivia en el decenio de 1980, del que hablamos antes, se basó en una economía rural en deterioro y vínculos rurales-urbanos más fuertes. Sin embargo, los campesinos buscaron soluciones colectivas a su situación en parte basada étnicamente, porque las reformas revolucionarias sobre la tierra, el trabajo y de orden político habían fortalecido previamente la solidaridad pueblerina. En el México posrevolucionario las estructuras pueblerinas no han despertado, hasta la fecha, gran desafío colectivo entre los campesinos económicamente presionados. Allí, los grupos locales han perdido gran parte de su autonomía pro su incorporación a instituciones del gobierno nacional y de partido, y el liderazgo local fue cooptado mediante el patronazgo en estructuras institucionales nacionales (que se consideran con más detalle más adelante). Así, las experiencias de México y de Bolivia indican que las revoluciones agrarias que refuerzan los lazos comunales y preservan la autonomía institucional local son más probables que aquellas que no despiertan movilizaciones de base pueblerinas subsiguientes.

El desafío colectivo es especialmente probable cuando el clima cultural es propicio también a los esfuerzos de movilización (Gamson, 1986). Debido a que la cobertura de los medios de información de masas puede ser decisiva para informar a las élites y al público sobre acciones de los movimientos así como para crear la moral y la propia imagen de los activistas de los mismos, los medios de información

son actores importantes en los conflictos políticos. Estos pueden convertirse en un canal por el cual se expresen criterios, símbolos y significados alternativos. Esto implica que los discursos de los medios crean temas para el público, y que los medios pueden convertirse en un campo en el que los grupos debaten acerca de la definición y la interpretación de la realidad social. Por estas razones, las clases dominantes en América Latina, y de manera especial, mas no exclusiva, bajo regímenes militares, han ejercido frecuentemente un gran control sobre las opiniones que llegan a expresarse. El analfabetismo y la pobreza de la región han limitado más estas funciones de los medios. Sin embargo, estos han tenido importancia en los movimientos de protesta y resistencia. Por ejemplo, las mujeres que protestaron contra la "guerra sucia" en Argentina, tuvieron una gran cobertura de los medios de información, incluida la cobertura en el exterior. También, el movimiento aymará de Bolivia tuvo una estación de radio aymará que reforzó la identidad y comunicó las preocupaciones étnicas.

La importancia de los medios puede radicar no sólo en que permiten a los grupos impugnadores expresar sus opiniones, sino también en dar a conocer a la gente modos de vida y de pensar distintos y, con ello, movilizar a los que previamente no estaban informados. McClintock sostiene, por ejemplo, que las comunicaciones modernas hicieron que los campesinos de la región peruana de Ayacucho estuvieran más conscientes de sus privaciones relativas, lo que, a su vez, avivó sus simpatías por el movimiento de guerrillas que se organizaban en su región.

En las comunidades en las que las tradiciones culturales refuerzan una identidad común un espíritu de resistencia, el desafío colectivo contra quejas comunes es probable aun sin acceso a los medios de información. La cultura es una esfera de la vida sobre la cual es frecuente que los grupos subordinados tengan algún control. Por lo tanto, puede ofrecer un ámbito en el que los grupos subordinados tengan algún control. Por lo tanto, puede ofrecer un ámbito en el que los grupos subordinados pueden alimentar su disensión moral contra el dominio. Sin duda, las expresiones culturales de desafío tienen más arraigo allí donde las privaciones han sido sufridas colectivamente durante generaciones y donde la vida institucional une a la gente en situación parecida. Las conmemoraciones de luchas pasadas, los funerales en honor de amigos y familiares que cayeron en defensa de causas comunes, los héroes y las baladas populares, y los rituales que incluyeron una protesta simbólica contribuyen a crear y reforzar expresiones culturales de resistencia. Wickham-Crowley, por ejemplo, encuentra que los movimientos guerrilleros arraigan de manera desproporcionada en las zonas que tienen historias de rebelión popular contra la autoridad central y a menudo fracasan allí donde faltan.

Si bien las culturas de resistencia hacen que el desafío colectivo sea más probable, raras veces son la chispa que prende la protesta. Sendero Luminoso, por ejemplo, estableció su base social inicial en una región con una tradición cultural de rebelión, Ayacucho. Sin embargo, Ayacucho dio poco apoyo a los esfuerzos de la guerrilla realizados veinte años antes, y una región vecina, Cuzco, con una tradición cultural de rebeldía tan fuerte o más que la de Ayacucho, pero con una base económica más viable en los decenios de 1970 y 1980 no respondió a los esfuerzos desestabilizadores de Sendero Luminoso. Una tradición de rebelión puede contribuir a los esfuerzos colectivos para producir un cambio cuando los grupos sienten

motivos de queja compartidos. Sin embargo, la causa fundamental de la protesta tiende a radicar en las desigualdades y las injusticias que son de origen estructural.

Las culturas de resistencia pueden seguir siendo significativas para la gente incluso después de que las condiciones que las originaron ya no son importantes. Es probable que estas culturas persistan cuando la gente que tiene antecedentes comunes sigue compartiendo quejas comunes y conservando las relaciones mutuas. Nash muestra que los mineros bolivianos, que figuran entre los trabajadores más militantes de América Latina, están profundamente influidos por las creencias y los rituales primordiales basados en su pasado agrícola. Las creencias de base campesina, anteriores a la conquista, que se perpetúan y se refuerzan mediante rituales, contribuyen a una identidad colectiva continua y a un sentido de cuándo la colectividad ha sido maltratada. Por consiguiente, la herencia cultural de los mineros ha influido tanto en el momento como en el lugar de las protestas sobre sus condiciones de trabajo deplorables. Los rituales no son una garantía del comportamiento. De hecho, la acción política inspirada por los rituales ha oscilado, según las circunstancias, entre la reacción y la revolución. Nash muestra que las festividades religiosas no son un sustituto del cambio social sino una base sobre la que se han asentado el trabajo y el desafío político. Algunas veces, reuniones que comenzaron como acontecimientos culturales viraron hasta convertirse en protestas políticas, y no siempre por propia iniciativa de los mineros. Esta represión politizó involuntariamente los eventos, y desde entonces, las matanzas, han sido incorporadas a la significación simbólica que los mineros dan a los rituales.

El efecto que los valores y normas culturales tienen en el desafío puede, como vemos, ser muy diferente de los que Kornhauser (1959) y otros teóricos de "la sociedad de masas" han planteado. Kornhauser sostuvo que el rompimiento de las normas suscitaba intranquilidad. Sin embargo, hemos subrayado lo contrario: que las tradiciones culturales pueden suscitar la protesta. A falta de lazos culturales y (de grupo), es probable que los individuos descontentos acepten su suerte (aunque sea a regañadientes) o que recurran a los esfuerzos individuales, no colectivos, para enmendarla.

El apoyo de individuos y grupos más privilegiados

Sin embargo, los mecanismos institucionales y las tradiciones culturales locales no son las únicas características de contexto que influyen en que la gente quejosa busque o no busque, de manera individual o colectiva, declarada o encubiertamente, soluciones a las condiciones que les desagradan. Tanto en la ciudad como en el campo los grupos económicamente subordinados tienen más probabilidades de desafiar las condiciones que les desagradan colectivamente si cuentan con el apoyo de individuos o grupos más favorecidos. Este apoyo estratégico puede provenir de las personas más prósperas, de los partidos políticos de reputación considerable, o de dirigentes religiosos.

Los movimientos de protesta no son el resultado necesario e inevitable de las contradicciones en los mecanismos de orden económico u otros mecanismos estructurales, incluso cuando los grupos subordinados perciben que su situación es

insatisfactoria e injusta. Los individuos mejor situados contribuyen a despertar a las masas y a moldear las demandas de los que han tomado conciencia de tal manera que el descontento individual es encauzado colectivamente.

Los individuos que están mejor situados pueden ser importantes por varias razones. Para empezar, pueden inducir a la gente de condición más baja a considerar como inaceptables las condiciones que, de otro modo, tal vez hubieran tolerado. En segundo lugar, pueden proporcionar a la gente común las capacidades de liderazgo y los recursos materiales que de otro modo podrían faltarles. En tercer lugar, su participación misma puede minimizar el uso de la fuerza contra los alborotados por parte de las élites. Ya que éstas son mucho más reacias a usar la represión contra la clase media que contra las clases "populares pueden estar más dispuestas a desafiar las condiciones que les desagradan y pueden tener más éxito en su presión a favor de un cambio.

Sin embargo, los individuos "bien situados" pocas veces logran incitar a la rebelión cuando los grupos subordinados no se sienten agraviados. Su importancia estriba en la dirección y la coordinación que dan a los sentimientos rebeldes.

Es probable que algunos de los movimientos que hemos considerado antes no hubieran surgido, incluso aunque las condiciones económicas "fundamentales" fueran propicias, de no haber sido por el apoyo brindado por individuos en mejor situación. Los movimientos entre los pobres urbanos que se resistieron a la cooptación y que hicieron presión en pro de nuevas demandas, por ejemplo, fueron iniciados por grupos externos: por el clero, militantes estudiantiles y partidos políticos. Las "comunidades de base" católicas que han suscitado los desórdenes ocurridos bajo la égida de prelados indignados por las condiciones económicas y políticas. Los movimientos autónomos en el norte de México fueron encabezados por estudiantes militares que aprovecharon las grandes tensiones entre la burguesía de Monterrey y los funcionarios locales del partido gobernante. La movilización de campamentos (asentamientos de invasores de terrenos) enteros en Chile, con Salvador Allende, ocurrió bajo el patrocinio de partidos políticos. Wickham-Crowley y McClintock destacan también cuán importante fue el liderazgo exterior en los movimientos de guerrilla que ellos estudiaron. La mayoría de los fundadores de movimientos de guerrilla han sido estudiantes y profesores universitarios, aun cuando la mayor parte de estos movimientos fracasaron precisamente porque el liderazgo no atrajo al campesinado de una manera significativa. El éxito de Sendero Luminoso en Ayacucho como McClintock detalla se debió a la capacidad del liderazgo para identificarse con su base social y atender a las preocupaciones locales; cuando los militantes no hicieron esto, el apoyo de los campesinos al movimiento desapareció.

La dirección externa es de particular importancia para convertir a las rebeliones rurales localizadas en movimientos revolucionarios coordinados nacionalmente. Es característico que los campesinos participen en actividades revolucionarias cuando una élite revolucionaria añade una nueva capa de liderazgo y de doctrina a la vida campesina. En todas las revoluciones latinoamericanas, los cultivadores se rebelaron contra las condiciones locales intolerables; su apoyo a los movimientos nacionales dependió de las alianzas con la inteligencia urbana.

Es posible que los movimientos “desde abajo” tengan el apoyo de otras clases o facciones de clases, y no sólo el apoyo de individuos mejor situados. La oposición de la clase trabajadora y baja a los gobiernos militares de Brasil y Chile cobró un impulso particular cuando estuvo apoyada por segmentos importantes de la clase media. Zmosc adjudica el origen del movimiento campesino colombiano ANUC al apoyo estratégico de la burguesía industrial. ANUC se derrumbó cuando los intereses políticos y económicos de los industriales cambiaron, llevándoles a volverse contra el campesinado.

Sin embargo, los individuos privilegiados no siempre canalizan las quejas de “la gente común” de manera que, en efecto, produzcan un cambio. Es posible que sus ideales sean imperfectos y que sus propios intereses se opongan. Garretón sostiene, por ejemplo, que las protestas en masa contra el régimen represivo de Pinochet en Chile no lograron que los militares se vieran obligados a retirarse a sus cuarteles, aunque estuvieran apoyados por grupos de la clase media, porque los partidos políticos, por sus propias razones oportunistas e ideológicas, compitieron por el control del movimiento de oposición. Con ello, los partidos socavaron la fuerza colectiva de la oposición. En cambio, en Brasil, en donde los partidos políticos han sido históricamente mucho más débiles, las protestas con base multclasista, lograron una exitosa restauración parcial de los derechos políticos. Sin embargo, una vez que los militares abandonaron el poder, las diferencias de clase dentro del movimiento de oposición pasaron a primer término, lo cual debilitó el movimiento y marginó políticamente a la clase trabajadora.

Al destacar el papel que los individuos “bien situados” pueden tener para despertar y canalizar la disensión, se hace evidente que los movimientos de protesta y resistencia no están determinados mecánicamente sólo por fuerzas estructurales y culturales. El liderazgo tal como muchos de los capítulos siguientes muestran puede tener un efecto decisivo. Sin embargo, su efecto no depende de condiciones que sea posible escoger.

## Las estructuras del estado

Como ya dijimos, los mecanismos y las políticas institucionales del estado benefician a los grupos de manera desigual, y las injusticias percibidas que crean son una causa de conflicto evidente. Sin embargo, los mecanismos institucionales también pueden ser un factor de contexto que influyen en las respuestas a las quejas. La naturaleza democrática o excluyente de los regímenes por una parte, y los recursos materiales, simbólicos y de organización del estado por otra, influyen en si el descontento se expresará o no y cuándo lo hará. Tanto la naturaleza de los regímenes como dichos recursos condicionan el que la gente recurra a estrategias colectivas o individuales, formales o informales para mejorar las condiciones que les desagradan.

Los movimientos democráticos se enfrentan con frecuencia a más protestas públicas que los regímenes militares excluyentes. Esto ocurre aun cuando la gente tiende a estar económicamente mejor bajo las democracias y aunque los regímenes democráticos ofrecen, por lo menos, algún acceso a los cauces legítimos de expresión política. La protesta es más probable en las sociedades políticamente "abiertas" porque los riesgos son menos y las perspectivas de gratificación son más. La percepción misma de las respuestas de los regímenes influye en la manera en que los quejosos responden a su suerte. Puesto que los gobiernos democráticos afirman gobernar en nombre de su ciudadanía y que deben celebrar elecciones periódicamente, están obligados a ser más sensibles a las demandas "populares"; de otro modo, el electorado podría cambiar después su preferencia a un partido de la oposición.

Decir que la democracia puede, sin querer, atizar la agitación cuando se asienta sobre un uso mínimo de la fuerza para gobernar hace que la teoría de la opción racional se ponga "de cabeza". Es decir, las personas quejasas pueden verse inclinadas a rebelarse no tanto porque se les presentan incentivos (la "zanahoria"), sino porque no están obligadas por el control del grupo dominante (el "garrote"). Por lo general, la falta de incentivos para no rebelarse es menor en los regímenes democráticos que bajo los regímenes autoritarios.

Los regímenes democráticos que se identifican con las clases trabajadoras son particularmente vulnerables a la presión "desde abajo". Los movimientos obreros en Chile –por ejemplo, entre los obreros de la industria textil- han seguido a elecciones nacionales que los trabajadores han percibido como victorias de la izquierda (Winn, 1986). Bajo gobiernos izquierdistas y populistas los trabajadores sienten evidentemente, que tienen buenas perspectivas de obtener concesiones mediante la movilización.

A su vez, las relaciones estado-trabajadores condicionan las respuestas a las quejas de una manera algo independiente del compromiso del régimen con la democracia y con las clases trabajadoras en particular. Para ilustrar esto, la actividad huelguística varía en América Latina con las relaciones entre el estado y los trabajadores. Por esta razón, las huelgas han sido menos frecuentes en México, en donde los trabajadores comparten el poder político formal mediante un estatuto corporativo en el partido en el gobierno, que en Chile antes de Salvador Allende, en donde los trabajadores tenían derechos de organización mas no lazos institucionales con el estado (Zapata, 1977). Los diferentes patrones de huelga no pueden atribuirse a diferencias objetivas en el estatus económico de los trabajadores en los dos países.

Los diferentes patrones de relación entre el estado y los trabajadores también ayudan a explicar las variadas respuestas a medidas de austeridad semejantes en toda la nación. El sistema corporativo de México contribuyó a una tolerancia pública de dichas medidas significativamente mayor que en muchos otros países de la región. Debido a que los grupos "populares" son incorporados formalmente en el aparato de gobierno-partido de México, no pueden oponerse fácilmente a las políticas estatales sin romper con el régimen. Además, el liderazgo de los grupos

afiliados al estado suele beneficiarse económica y políticamente de la afiliación al mismo, aunque las masas no se beneficien.

A falta de un sistema corporativo bien instituido, las divisiones entre las élites así como entre las élites y los grupos de trabajadores, pueden dar lugar a desafíos. Por lo general, la clase gobernante tiene un interés creado colectivo para preservar el statu quo. Pero el cambio social y económico puede afectar a los grupos de élite de modo diferente, hasta el punto en que no queden igualmente comprometidos con el statu quo. Las élites que compiten por el dominio pueden buscar el apoyo de las clases más bajas y, al hacerlo, aumentan las esperanzas de los pobres de que el cambio es posible y debilitan la legitimidad de las instituciones que los oprimen. Las élites políticas rivales pueden incluso atizar involuntariamente los tumultos cuando los candidatos y los partidos que exigen lealtad política elevan las esperanzas y las aspiraciones del pueblo. En Colombia, tanto La Violencia como la política de la alianza entre la burguesía industrial y el campesinado que llevaron a la formación de ANUC estuvieron basadas en las tensiones económicas y políticas entre facciones de la clase dominante. En su búsqueda de votos, los candidatos contendientes se dirigieron a los pobres urbanos y rurales de maneras que llevaron a movilizaciones de masas, invasiones de tierras y otras formas de intranquilidad. De igual manera, la restauración de la democracia en Bolivia en el decenio de 1980 provocó una competencia política que, a su vez, precipitó manifestaciones, bloqueo de carreteras y huelgas; en realidad, la protesta se convirtió en la manera peculiar de carreteras y huelgas; en realidad, la protesta se convirtió en la manera peculiar en que los grupos hicieron presión a favor de sus intereses y disputaron el poder.

La experiencia boliviana pone de manifiesto otra manera en que las estructuras estatales conforman la actividad de protesta, independientemente de las políticas que los estados aplican: la capacidad de recursos del estado. Entre los recursos pertinentes del estado figuran la capacidad para mantener la unidad en el aparato estatal mismo y recursos materiales y simbólicos con los cuales engañar a los electorados y disuadir a la oposición. Cuanto más débil es y más dividido internamente está un gobierno, más instituciones estatales serán presa de presiones nacionales y exteriores que atizan el desafío; esto es probable en los regímenes democráticos y en los que no lo son.

Walton señala, en el capítulo 10, que no sólo la estructura formal del estado –su forma democrática o autoritaria– sino también la capacidad de un “bloque de poder” para mantener la hegemonía influirá en las respuestas a las políticas impopulares. Los grupos quejosos son especialmente proclives a desafiar las condiciones que les desagradan en las sociedades que están muy divididas políticamente. Walton observa, por ejemplo, que si bien los gobiernos democráticos y autoritarios han puesto en práctica programas de austeridad por igual, las protestas contra los programas han sido mayores en los países en donde las divisiones políticas y las luchas por el poder han preparado el terreno.

Los recursos materiales y simbólicos que pueden difundir (o desactivar) la intranquilidad potencial incluyen el patronazgo y los subsidios. Estos recursos pueden ser administrados de manera que cultiven las relaciones de tipo patrón-cliente, y con ello la deferencia y la dependencia. Con frecuencia los grupos

económicamente subordinados pueden ser calmados con beneficios materiales pequeños, y sus líderes, con beneficios económicos y políticos. Al utilizar con habilidad los recursos materiales limitados, los estados pueden minimizar la intranquilidad "popular" mientras gobiernan principalmente a favor de los intereses de los burócratas y de la clase dominante. Cuanto más "hinchado" o mayor es el aparato estatal y cuando mayor es la base de ingresos del estado, más fácilmente pueden ser usados los recursos para producir relaciones clientelares.

Aun cuando los regímenes latinoamericanos han dependido de las políticas de patronazgo y las han cultivado, su capacidad para seguir haciéndolo se redujo con las crisis fiscales en el decenio de 1980. Además, el FMI ha insistido en recortes al sector estatal como condición previa para el refinamiento de la deuda. Así, en el momento mismo en que el crecimiento del desempleo y el deterioro del nivel de vida provocaron que la necesidad de ayuda fuera mayor, los gobiernos fueron menos capaces de atender a las necesidades civiles por medio del patronazgo y otros subsidios. Es posible que las protestas aumenten con la disminución de la presencia del estado en la sociedad.

Sin embargo, los recursos simbólicos del estado pueden eliminar la protesta cuando los recursos materiales no lo hacen. Por ejemplo, los gobiernos democráticamente elegidos pueden dar la impresión de que son sensibles a las preocupaciones "populares" y, con ello, inducir la calma. Alan García en Perú y Raúl Alfonsín en Argentina, por ejemplo, tuvieron un atractivo carismático y populista. En un nivel más institucional, el partido dominante en México ha contribuido –junto con los recursos materiales de que dispone– a la estabilidad duradera del régimen. El partido hace hincapié en que tiene sus raíces en la revolución del país. Aunque gobierna principalmente en interés de las clases media y alta, el partido ha propagado una ideología populista que priva a la izquierda de "espacio" simbólico.

Los estudios indican que las estructuras del estado a las que las revoluciones dan lugar minimizan la probabilidad de un desafío posterior. Por ejemplo, Skocpol, basándose en las experiencias francesas, soviética y china, sostiene que los estados se vuelven más burocratizados y centralizados y más autónomos de los grupos nacionales y de las potencias extranjeras como resultado de las transformaciones revolucionarias. La autora da a entender que los cambios estructurales reducen la probabilidad de una actividad de protesta subsiguiente. Skocpol afirma, además, que independientemente del tipo de estado al cual dan lugar, los nuevos regímenes son más capaces de regular la sociedad administrativa, ideológica y coercitivamente que los regímenes que desplazaron. El impacto de los movimientos revolucionarios en las estructuras del estado se tratará más adelante, pero es importante señalar aquí que aun cuando las revoluciones dan lugar a estados más centralizados y burocráticos, estos modifican la manera en que las quejas se expresan, no eliminan el conflicto. Cuanto más centralizado es el estado y mayor es su capacidad de represión, más probable es que el descontento se exprese de modos encubiertos; esto es cierto en todos los regímenes, hayan nacido o no de una revolución.

En América Latina, las revoluciones han modificado las estructuras estatales de modo que han influido en las respuestas subsiguientes a las quejas. El patrón de la



protesta posrevolucionaria ha variado, en parte, con la naturaleza y la fuerza de los estados que han nacido de los levantamientos. En Cuba, la revolución dio lugar a un estado más fuerte, más hegemónico que el anterior. Aunque ostensiblemente es un "estado de trabajadores", no siempre ha gobernado en interés de éstos, y los trabajadores, como ya dijimos, se han resistido a las políticas que les desagradan. Sin embargo, debido a que la protesta pública es peligrosa bajo Castro, la gente tiene formas encubiertas de desafío cuando está descontenta. La revolución no ha eliminado el conflicto; meramente ha cambiado la naturaleza de las quejas y la manera en que se expresan.

En México, el estado prerrevolucionario ya estaba muy centralizado. Sin embargo, la revolución fue consolidada de manera que vinculó a los grupos militares y civiles con el aparato del estado sobre una base funcional y territorial. La reestructuración dio a diversos grupos un interés en el statu quo, aunque en grados y formas diferentes. Estos intereses, a su vez, han inclinado a los grupos quejosos a cumplir "las reglas del juego" y buscar el cambio "desde dentro". Cuando hubo un desafío abierto, fue generalmente aislado y localizado. Como consecuencia, no surgieron importantes movimientos de protesta pluriclasistas hasta el decenio de 1980, cuando un terremoto descolocó a muchas familias de clase bajo y media ya golpeadas por la crisis económica del país. Entonces, los damnificados -como son llamadas las víctimas del terremoto- de zonas ricas y pobres de la ciudad de México protestaron juntos en demanda de nuevas viviendas.

Sin embargo, aun cuando los mexicanos han estado aparentemente tranquilos, hubo formas encubiertas de desafío en todas partes y fueron toleradas por la clase gobernante. La ley es continuamente violada tras bambalinas, no públicamente en las calles. El régimen, en particular, medra en la corrupción. Durante decenios, este desafío cotidiano a la ley aumentó la estabilidad del régimen; todos los grupos tenían algún interés en el incumplimiento de las reglas racionales burocráticas. Sin embargo, con la contracción económica y la crisis fiscal del decenio de 1980, la base material para la corrupción se agotó; la contracción fiscal puede explicar por qué el gobierno "optó" por lanzar una campaña anticorrupción en el momento en que el apoyo electoral al partido "oficial" se había vuelto problemático. Como los que se benefician de retribuciones y de prebendas políticas son menos, el incentivo para colaborar con las élites disminuirá y es probable que el desafío electoral y de otras clases aumente.

En Bolivia, en cambio, la revolución ha dado lugar probablemente a más protesta pública que el antiguo régimen. El nuevo régimen nunca logró una unidad interna. Los grupos previamente excluidos del cuerpo político se han sentido con derecho a nuevos beneficios, mientras que la base de recursos del estado no se ha expandido lo suficiente para atender nuevas demandas, y las ganancias potenciales del desafío bajo gobiernos civiles (sobre todo, entre 1952 y 1964 y bajo Siles Zuazo en los comienzos del decenio de 1980) a menudo han sido mayores que los costos potenciales. Por consiguiente, el crecimiento de la presencia del estado en la sociedad, incluso después de la revolución, no implica necesariamente una tranquilidad mayor. Los mecanismos institucionales del estado y su capacidad de recursos influyen en la manera en que la gente descontenta responde a las condiciones que les desagradan, independientemente de que los gobiernos estén basados o no en la revolución.

Si bien las estructuras estatales condicionan la probabilidad y las formas de protesta, no son entidades estáticas. Pueden cambiar, incluso en respuesta a las presiones "desde abajo". Esto es evidente en el contexto de la revolución, pero también es verdad en ausencia de ella. Incluso los regímenes revolucionarios pueden comenzar como gobiernos de reforma moderados. Puesto que los mecanismos institucionales cambian, también debería cambiar el impacto del aparato político en un desafío posterior.

El hecho de que los recursos tienen importancia para los movimientos de protesta ha sido, por supuesto, bien documentado por los teóricos de la movilización de los recursos. Sin embargo, hemos recalcado mucho más que estos teóricos la manera en que las fuerzas macrosociales y culturales condicionan el desafío y las distintas formas en que se expresa. Nuestros enfoques no son incongruentes, pero nosotros proporcionamos una base para comprender cómo los factores de contexto moldean la amplia gama de maneras en que los recursos son utilizados.

#### Opciones de salida

Las opciones que la gente tiene, y que considera que tiene, influyen también en las respuestas a las injusticias sentidas. Cuando mayor es la diversidad de opciones, menor es el descontento con las condiciones que en cualquier marco desatarán el desafío colectivo.

En cualquier medio social y cultural, cuanto más atractivas son las alternativas económicas más probable es que la gente "salga" en lugar de rebelarse. Por lo tanto, es esencial comprender las condiciones en las cuales recurre a tales estrategias de adaptación individuales en vez de recurrir al desafío colectivo para resolver las condiciones con las que se sienten a disgusto.

Hay varias opciones económicas que los individuos descontentos pueden considerar. Pueden migrar por temporada o de manera permanente, cambiar de empleo o tomar un empleo adicional. Durante decenios, la migración latinoamericana ha ofrecido suficientes promesas a los trabajadores rurales, que éstos, con más frecuencia, han optado por "salir" en vez de rebelarse cuando las condiciones en el campo parecieron intolerables.

Como estrategia de adaptación individual, la diversificación de los papeles económicos tiene ramificaciones en cada esfera de trabajo. Los trabajadores con una sola fuente de ingresos que sufren privaciones colectivamente pueden ser más aptos que los trabajadores con varios empleos para tratar abierta o encubiertamente de cambiar las condiciones de trabajo que les desagradan, a menos que los riesgos de represalias y de pérdida del empleo sean muy altos. Sin embargo, los patrones que dependen de trabajadores con varios compromisos económicos pueden encontrarse con que su fuerza de trabajo no es confiable; es

más probable que estos trabajadores falten al trabajo por contradicciones en las demandas de su tiempo y es posible también que usen sus diversos empleos en provecho propio. Los trabajadores asalariados, por ejemplo, pueden abandonar su trabajo o faltar al mismo durante períodos importantes para el ciclo agrícola y pueden robar materiales de su lugar de empleo para utilizarlos en trabajos adicionales. Desde el punto de vista de lo que es ventajoso para el patrón, este "sabotaje" económico no coordinado puede resultar más difícil de dominar que la actividad sindical.

El gobierno cubano ha experimentado las consecuencias complejas de las opciones económicas diversificadas para los trabajadores. Como ya dijimos, hacia 1980 el gobierno empezó a permitir a los cultivadores que vendieran los excedentes que habían producido por encima de la cuota del estado al precio que el mercado tolerara; se establecieron para ellos nuevos "mercados de agricultores" en las ciudades. Al mismo tiempo, el gobierno permitió también que los empleados del estado realizaran trabajo privado en pequeña escala en sus horas libres. Las reformas tenían el propósito de aumentar la productividad y hacer que la economía respondiera mejor a la demanda del consumo, ya que el nivel de vida bajo (pero bastante equitativo) había contribuido al descontento con el régimen en los últimos años del decenio de 1960. Sin embargo, los trabajadores manipularon las reformas en provecho propio. Los agricultores entregaron al estado sus peores productos con el fin de lograr el máxima de ganancias en el "mercado libre", más lucrativo, y se creó un estrato ilícito de intermediarios para aprovechar las nuevas oportunidades de mercado. Además, los trabajadores también faltaron a sus empleos normales para aprovechar sus actividades secundarias, y robaron materiales de los empleos estatales para usarlos en las actividades secundarias (Granma, revista semanal, 11 de marzo de 1984, p. 4). Así, al diversificar las opciones económicas de los trabajadores para resolver los problemas de productividad y de carácter político, el gobierno creó nuevas bases para el desafío silencioso de los trabajadores a los reglamentos del estado. Debido a la severidad de las distorsiones causadas por la "apertura del mercado", el gobierno cerró los mercados privados en 1986 y lanzó una campaña de "rectificación".

Además, el capítulo 3 señala las ramificaciones del empleo múltiple para los organizadores de los movimientos de protesta. La dirección de ANUC, en Colombia, tuvo dificultades para movilizar a los agricultores debido, en parte, a que su base rural era muy heterogénea, pero también porque los agricultores individuales estaban envueltos en múltiples relaciones de clase con intereses opuestos. Cuando ANUC intentó organizar al proletariado rural, por ejemplo, se encontró con trabajadores asalariados de tiempo parcial que estaban constantemente en movimiento; los trabajadores también eran pequeños terratenientes que tenían intereses como propietarios y también como proletarios.

Cuando hay oportunidades alternativas y la gente no las aprovecha, no debe suponerse a priori que los trabajadores están contentos con su suerte si están tranquilos. Es posible que consideraciones que no sean de orden económico como los lazos de parentesco y de comunidad puedan hacer que los trabajadores descontentos se muestren reacios a "salir" y aprovechar empleos en otra parte. Mientras tanto, los factores de contexto previamente señalados pueden inclinar a los individuos quejosos a aceptar su condición como si ésta no pudiera cambiar o a

desafiar las condiciones que les desagradan de manera silenciosa y mínimamente coordinadas.

Los empresarios que buscan mano de obra barata para la industria y la agricultura se han enfrentado al problema de inducir a los campesinos pobres, especialmente a los pequeños terratenientes de subsistencia, a aceptar trabajo asalariado, renuentes a pesar de que su situación financiera habría mejorado. Por ejemplo, en las tierras bajas bolivianas, escasamente pobladas, fue necesario recurrir a los reclutas militares para pizcar el algodón en el decenio de 1970; los campesinos pobres de las tierras altas se negaron a responder al llamado de trabajo. La gratificación económica se consideró insuficiente para compensar los costos personales que la migración habría entrañado.

Las élites políticas que han ofrecido incentivos materiales a los campesinos en las regiones muy politizadas para inducirlos a migrar también se han encontrado con problemas semejantes. Esto ocurrió también en Bolivia. El gobierno boliviano, con el apoyo de Estados Unidos, patrocinó "proyectos de colonización" para reasentar a los campesinos de las zonas densamente pobladas del valle y de las tierras altas después de la revolución de 1952. Los programas tenían el propósito tanto de fomentar la producción de alimentos muy necesarios para el mercado interno como de reducir la agitación en las zonas de concentración campesina. Aun cuando los "colonizadores" podían beneficiarse económicamente de su reasentamiento, las perspectivas no fueron suficientes como para inducirlos a romper con su modo de vida pueblerino. Sólo cuando el cultivo de la coca para el mercado de cocaína extranjero se volvió muy provechoso en las zonas de colonización, los campesinos de las tierras altas estuvieron dispuestos a ese rompimiento, pero lo hicieron en desafío al gobierno, el cual, bajo la presión de Estados Unidos, proscribió allí las actividades relacionadas con dicho cultivo. De manera paradójica, las zonas nuevas, que tenían el propósito de reducir la lucha rural, se convirtieron en centros de enfrentamientos entre campesinos, intermediarios y policías una vez que el cultivo de la coca se volvió muy lucrativo en el decenio de 1980.

Así, las opciones alternativas influyen en la manera en que las personas quejosas responden a su suerte. Las alternativas que estas personas considerarán varían con sus valores, sus compromisos y sus lazos sociales y no sólo o necesariamente con la gama real de alternativas que hay. Es probable que los trabajadores insatisfechos "salgan" si objetivamente existen opciones para hacerlo y si los lazos que tienen con sus empleos existentes o con su comunidad no son estrechos. Las amistades y la tradición compensan la dedicación al empleo, incluso cuando las condiciones de trabajo son opresivas y cuando los riesgos de movilizarse para mejorarlas son elevados. Con frecuencia los campesinos deben migrar para mejorar su suerte porque las opciones locales son muy militadas, pero entre campesinos igualmente pobres, aquellos que tienen lazos comunitarios más débiles son los más susceptibles de abandonar su modo de vida en el pueblo.

En esencia, tanto los factores irracionales como los racionales condicionan las respuestas a las injusticias, incluyendo la salida o la rebelión de los descontentos. Es posible comprender los factores irracionales si se toman en cuenta

los entornos social y cultural; sin embargo, estos factores no pueden comprenderse únicamente en el nivel del individuo-

## EL IMPACTO DE LA PROTESTA

A pesar de que se ha prestado mucha atención a los orígenes del desafío, su impacto ha sido estudiado raras veces. El resultado sólo depende parcialmente de la cólera, la ideología y las tácticas de los que protestan; depende mucho de si los actos "subversivos" socavan seriamente la legitimidad y la base económica de las élites. La manera en que los grupos poderosos responden a la presión de "los de abajo" tiene gran relevancia en el resultado del desafío. Las clases aliadas en movimientos de protesta y las fuerzas económicas y políticas también pueden tener importancia.

### Las respuestas de la élite

Las respuestas del grupo dominante no pueden predecirse mecánicamente a priori. En el nivel del estado, gobiernos militares y civiles por igual han contestado a los levantamientos populares tanto con reformas como con represión. Sin embargo, es más probable que los regímenes democráticos, cuya legitimidad depende de las masas, respondan a las protestas con reformas, especialmente si tienen la capacidad de recursos para hacerlo. Así pues, las respuestas de los gobiernos dependerán de sus recursos represivos y administrativos y de su inclinación hacia la represión o a la reforma.

Las élites perciben la protesta pública como una amenaza porque es muy visible y puede ser "contagiosa". Sin embargo, las formas calladas de desafío, tales como la haraganería, los hurtos y la destrucción de las papeletas electorales pueden ser igualmente preocupantes para ellas si sus demandas de utilidades o de legitimación son amenazadas de esa forma.

Cuando las élites responden a la protesta de con la fuerza, es posible que el movimiento de oposición se fortalezca. La fuerza puede aumentar la cólera contra las élites y aumentar también la solidaridad entre las personas que comparten las quejas. Sin embargo, los niveles de terror extremos -como lo señala Wickham.Crowley- tienen el efecto históricamente "exitoso" de apagar la rebelión; este resultado es especialmente probable cuando los que protestan consideran que no tienen opciones. El terror extremo parece haber sido la ruina de una serie de movimientos de guerrilla urbana en el decenio de 1970; por ejemplo, los tupamaros en el democrático Uruguay.

La represión raras veces sofoca a los movimientos cuando el estado mismo está internamente dividido, cuando la revuelta está difundida y cuando los que protestan gozan de movilidad táctica. Los gobiernos latinoamericanos no tienen la capacidad material para emplear la fuerza en gran escala a menos que sean

financiados desde fuera, y los países democráticos de la región no pueden, por razones ideológicas, confiar en el uso prolongado y extenso de la fuerza para gobernar. Mientras las capacidades represivas del estado sean limitadas (por razones materiales o ideológicas) y los rebeldes puedan mover sus bases de operación y estén dispuestos a hacerlo, la fuerza no frenará los movimientos de oposición. En Perú, por ejemplo, la represión del gobierno contra Sendero Luminoso en las tierras altas del sudeste (junto con las reformas emprendidas por el presidente populista Alan García) debilitaron el apoyo al movimiento a mediados del decenio de 1980. Sin embargo, para no aceptar la derrota, el movimiento se trasladó a otras regiones del país y, en este proceso, diversificó sus bases de apoyo.

En el capítulo 11 se muestra que las respuestas del estado conforman los resultados del levantamiento. Aunque las protestas que Walton estudió fueron igualmente producidas por medidas de austeridad, su efecto varió de manera considerable. A su vez, las respuestas del gobierno estuvieron basadas estructuralmente; dependieron de los recursos y de las relaciones entre el estado y la sociedad. Los insurgentes obtuvieron algunas concesiones de manera característica. Sin embargo, bajo regímenes débiles e impopulares, las ramificaciones del desafío fueron a menudo considerables; las protestas fueron causa del derrocamiento del gobierno o acrecentaron su debilitamiento. En cambio, algunos de los gobiernos más fuertes pudieron hacer que los levantamientos resultaran en su propia ventaja. Por temor de que el desorden hemisférico pudiera desatarse, el gobierno de Estados Unidos y los acreedores internacionales han permitido que los países más poderosos pagaran sus deudas en términos más favorables cuando han sido sacudidos por las protestas.

Las respuestas de las élites también han influido mucho en los resultados de los movimientos guerrilleros. Whickham-Crowley muestra que estos movimientos están menos inclinados a expandir sus bases de apoyo y es más probable que se vean limitados en sus logros cuando los gobiernos son algo sensibles a los intereses populares. Los dos movimientos guerrilleros latinoamericanos que lograron hacerse del poder tuvieron lugar en países en donde dictadores inflexibles respondieron a los retos revolucionarios con mucho rigor. Por el contrario, los dos únicos países centroamericanos –Costa Rica y Honduras– en donde no hubo movimientos de guerrilla importantes en los decenios de 1970 y 1980 tuvieron gobiernos más sensibles a las quejas de las masas.

Aunque los movimientos de protesta prolongados pueden socavar la legitimidad del estado, las tomas del poder extralegales que han tenido éxito han dependido por lo general de la desunión interna del aparato estatal. La desertión militar ha sido definitiva para las victorias revolucionarias.

Los resultados de los conflictos basados en las relaciones económicas dependen, a su vez, de las respuestas de la clase dominante. En los marcos industriales, las concesiones parciales de la administración pueden reducir la militancia obrera, y la aceptación de la negociación colectiva puede hacer que el desafío sea habitual hasta el punto de que su impacto desorganizador y sus costos en las utilidades se minimizan. En el caso de la agricultura, Paige (1975) ha

sostenido que los movimientos sociales rurales y sus resultados dependen en parte de las bases de riqueza de la élite. La élite agraria está, por lo menos, inclinada a responder a la presión "desde abajo" con reformas cuando su fuente principal de riqueza deriva de la tierra (en comparación con el capital). Si los trabajadores también dependen de la tierra (en comparación con el salario) para subsistir, es probable que la inflexibilidad de los terratenientes induzca a un movimiento revolucionario entre la mano de obra rural descontenta.

En el contexto de la revolución, el cambio de la dinámica del estado moldea la protesta subsecuente. Como ya dijimos, Skocpol muestra cómo y por qué las exigencias burocráticas establecen tendencias semejantes en revoluciones tan distintas como la francesa, por una parte, y la soviética y la china por otra. Sin embargo, la autora no ofrece una base analítica para comprender cómo los modos de organización económica y las relaciones asociadas de clase y políticas moldean los resultados revolucionarios. Skocpol indica que las exigencias burocráticas son más decisivas que las fuerzas de clase e ideológicas para dar forma a las políticas del nuevo régimen.

Se diría que las fuerzas de clase e ideológicas, así como las fuerzas burocráticas, influyen en los efectos de la revolución. Mi estudio de los resultados de las revoluciones latinoamericanas en el bienestar social (véase Eckstein, 1982) documenta, por ejemplo, cómo la base de clase de los regímenes nuevos y el modo dominante de organización económica moldean las políticas de distribución después de la revolución. Yo observé que el modo de producción dominante durante el nuevo orden tenía una influencia decisiva en los patrones de distribución de la tierra y del ingreso así como en la asistencia a la salud. En América Latina el socialismo ha permitido ciertas opciones de asignación que el capitalismo no ha ofrecido, aunque los mayores beneficios para las clases bajas en Cuba ocurrieron cuando el nuevo régimen consolidó primero su poder. Sin embargo, el gobierno cubano posrevolucionario es el que menos tolera el disenso. Los estados posrevolucionarios difieren en sus políticas de distribución y de participación de acuerdo con sus prejuicios de clase, su apertura política y sus recursos.

#### Alianzas de clase

Cuanto más diversificada es la base de resistencia más difícil le resulta a un estado atender a las diversas quejas de grupos por la fuerza o por la reforma de una manera concomitante. Si bien las respuestas de la élite son importantes, también lo son las respuestas de otros grupos en la sociedad civil. Los movimientos revolucionarios tuvieron éxito en México, Bolivia, Cuba y Nicaragua cuando no sólo los grupos "populares" sino también sectores de la clase media con inclusión de los profesionales, los educadores y ciertos empresarios desafiaron al antiguo régimen. En cambio, cuando las clases medias urbanas no se han unido, los movimientos agrarios nunca lograron transformaciones del régimen. Es mucho menos probable que los gobiernos usen la fuerza contra las clases medias; por consiguiente, es mucho menos probable que los movimientos en los que participan las clases medias sean reprimidos. Los diversos grupos socioeconómicos que se rebelaron en México, Bolivia, Cuba y Nicaragua tenían diferentes razones para desafiar al gobierno en el poder, pero el efecto claro de su defección combinada fue un rompimiento del orden político y económico existente. Las alianzas de clase demostraron ser

posibles porque la dirección de los movimientos de oposición en cada país hicieron hincapié en metas políticas moderadas, tales como el derrocamiento de una dictadura o el restablecimiento de la democracia; la dirección no instó al socialismo ni siquiera cuando, como ocurrió en Cuba, y, en menor medida, en Nicaragua, los regímenes nuevos se comprometieron luego con el socialismo.

Para las clases trabajadoras las alianzas con las clases medias son, de manera característica, algo bueno sólo relativamente. A la larga, la clase media tiende a dominar los movimientos pluriclasistas para sus propios fines. En México, por ejemplo, una alianza entre algunos grupos urbanos de clase media y los zapatistas agrarios tuvo como resultado una reforma agraria que los campesinos no hubieran podido obtener por sí solos y a la que las clases medias revolucionarias se opusieron inicialmente. Sin embargo, como ya dijimos, a reforma anticapitalista contribuyó a la postre a establecer un régimen procapitalista. La clase media dominó el estado recién formado, al cual usó principalmente en su propio provecho. En Bolivia, los intentos de la clase media por derrocar a la oligarquía terrateniente y minera fracasaron en los primeros años del decenio de 1940; sólo cuando los reformadores de clase media se aliaron con el movimiento obrero cada vez más militante pudieron triunfar. Inicialmente, después de la revolución de 1952, los trabajadores se beneficiaron con la alianza: la oligarquía fue derrocada y los trabajadores obtuvieron el derecho de organizarse, el poder de veto en las minas y el derecho de designar a los candidatos a la vicepresidencia, al Congreso y a los titulares de algunos ministerios. Sin embargo, una vez que la facción de la clase gobernante vino a considerar a los trabajadores como un estorbo y que recibió ayuda militar y económica del extranjero, se volvió contra aquella misma clase con la cual derrocó al antiguo orden. Los trabajadores perdieron casi todo lo que ganaron en los primeros años de la revolución.

Como lo ilustran los ejemplos mencionados, ni las clases ni los estados son entidades estáticas. Cuando las prioridades de los grupos poderosos cambian, es posible que cambie también la posición hacia los movimientos "desde abajo"; estos cambios pueden afectar tanto al papel del estado como a un factor de contexto que moldea la manera en que las quejas se expresan, y las respuestas del estado a las protestas cuando éstas ocurren. Las prioridades estatales pueden cambiar tanto con las exigencias económicas y políticas (que incluyen consideraciones del mercado global y geopolíticas, así como de acumulación y legitimación internas), como con los cambios en la base de la riqueza de la clase dominante y las relaciones entre el estado y las clases. Zamosc, por ejemplo, señala que la burguesía industrial colombiana y el estado reprimieron y dividieron a un movimiento campesino al cual crearon cuando cambiaron las relaciones de la clase dominante y las prioridades del estado. En Bolivia, la clase media se volvió contra los trabajadores cuando la base de su riqueza se alteró después de la revolución. Con el acceso a las nuevas fuentes de riqueza mediante el estado y la agricultura comercial en una región del país previamente subdesarrollada, ya no "necesitó" a los trabajadores.

Las fuerzas económicas y geopolíticas globales



Las fuerzas económicas y políticas globales también pueden tener un efecto decisivo en el resultado del desafío. Las respuestas a los actores internacionales poderosos dependen de sus intereses, de su capacidad para defenderlos y de las condiciones económicas globales.

En el decenio de 1980 los intereses económicos del tercer mundo se centraban no sólo en los suministros de materias primas y en los mercados extranjeros, sino también en las fábricas foráneas que producían para el mercado nacional. Sin embargo, las respuestas de poderosos actores internacionales han dependido no sólo de sus intereses sino también de la "época" (Walton, 1984). Las "mismas" prácticas (por ejemplo, el comercio y la manufactura) pueden tener significados y consecuencias diferentes dependiendo del momento en que ocurren. Además, las formas "aceptables" en las que los actores internacionales poderosos pueden afirmar sus intereses han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, la intervención militar directa se considera cada vez más inaceptable. Por consiguiente, las potencias mundiales suelen depender mucho más de la contrainsurgencia y de los bloqueos económicos, los cuales no siempre son tan eficaces.

Las respuestas de los actores internacionales poderosos no sólo dependen de sus intereses económicos. Las consideraciones geopolíticas, que no pueden ser explicadas totalmente en términos de intereses económicos "básicos", también pueden tener importancia. La política de la guerra fría ha tenido un efecto considerable sobre las reacciones extranjeras hacia las luchas del tercer mundo.

En específica referencia a América Latina, porque los países de la región tienen una posición débil en la economía mundial, las condiciones globales influyen con frecuencia en el resultado del desorden interno, incluyendo el que se finca en preocupaciones aparentemente nacionalistas. Es posible que los grupos externos ayuden a los grupos impugnadores de manera que afecten la fuerza material y simbólica de cada lado. Sin embargo, la dinámica global puede moldear el resultado de las luchas internas incluso cuando no hay una intervención extranjera específica. A este respecto la oportunidad de la protesta puede ser esencial. En México, por ejemplo, los campesinos ganaron derechos importantes a la tierra sólo después de veinte años de lucha civil. Su victoria llegó con la Gran Depresión. Estados Unidos estaba demasiado preocupado en aquel tiempo con sus propios problemas internos como para intervenir, y cuando los precios de las exportaciones cayeron, la capacidad y la motivación de los terratenientes para resistirse a la expropiación de debilitaron. En aquellas circunstancias, el estado "optó", y pudo optar, por redistribuir la tierra para restablecer el orden en el país. De manera semejante en Perú, el gobierno militar populista del general Velasco Alvarado se encontró con poca oposición de la élite a su reforma agraria arrolladora en 1969 debido a la oportunidad de la nueva ley. Por entonces, los precios bajos de los productos básicos hacían que la agricultura comercial interna no fuera provechosa (especialmente en el sector de la caña de azúcar) y los intereses de la élite desde la segunda guerra mundial habían cambiado considerablemente de la agricultura a la industria. Por ende, la oligarquía tuvo un interés limitado en defender sus tierras.

A su vez, la dinámica geopolítica global ha moldeado los movimientos de resistencia en América Latina. El miedo al comunismo al sur de Estados Unidos ha influido en las reacciones estadounidenses a los movimientos nacionalistas progresistas en Cuba, Chile, Nicaragua y otros países centroamericanos, países en los que Estados Unidos ha tenido relativamente poco interés económico. Aun cuando ese país desplegó una serie de tácticas para socavar los movimientos de izquierda en cada uno de aquellos, sus esfuerzos no siempre tuvieron éxito pese a su preeminencia global. La experiencia cubana demuestra que la política exterior de Estados Unidos puede tener el efecto opuesto al que se proponía: al intentar sofocar el movimiento nacionalista populista de Castro mediante la imposición de un bloqueo económico, Estados Unidos contribuyó a empujar a Cuba al campo soviético.

Al poner de manifiesto cómo las respuestas de la élite, la desunión dentro de la clase dominante y el aparato del estado, las alianzas múltiples, el mercado global y la dinámica geopolítica moldean nuestro desafío por lo menos de manera algo independiente de los motivos que lo suscitan y la forma que adopta, podemos ver los resultados de la mayor parte de las explicaciones de los movimientos de protesta y sociales. Con frecuencia no es posible deducir los resultados por las causas de rebelión de la gente, las condiciones en las que fuerzas más vastas influyen en el patrón de desafío y en sus logros pueden estudiadas e incorporadas analíticamente en una teoría de la protesta y la resistencia. Sin embargo, la índole coyuntural de algunas de estas fuerzas y el hecho de que el poder puede ser usado de maneras diversas (¡hasta de ninguna manera!) significa que ninguna teoría mecanicista o abstracta servirá. Siempre habrá variabilidad histórica y los mejores estudios siempre estarán basados históricamente.

## LA PROTESTA LATINOAMERICANA EN UNA PERSPECTIVA COMPARADA

Los estudios reunidos en este volumen indican que ciertas características distintivas, así como otras más generales, moldean la protesta en América Latina. Desde una perspectiva global, los países son política y económicamente débiles. Todos ellos dependen de la tecnología, el capital y el comercio extranjeros aunque la manera en que están vinculados con la economía mundial ha cambiado algo con los años y las vinculaciones, también difieren un poco, entre los países de la región. A su vez, la dependencia económica de estos países los ha hecho vulnerables a los intereses mudables de la potencia dominante. La dependencia ha moldeado el alcance y la naturaleza de las oportunidades para los grupos locales, los tipos de quejas que éstos tienen, si desafían o no las condiciones que les desagradan, la forma en que lo hacen y los resultados de este desafío. Por supuesto, el tipo de vínculos que los países tienen con la economía mundial y la geopolítica no son los únicos factores importantes. Sin embargo, tienen la importancia suficiente como para que no se pueda suponer a priori que los grupos económicos tienen las mismas quejas y que sus actos de desafío producen los mismos efectos en América Latina que en los países más industrializados.

Los países latinoamericanos comparten, además, una herencia ibérica común, que incluye una tradición centralista burocrática basada en la premisa de la jerarquía y la desigualdad y una visión del mundo inspirada en el catolicismo (véase Véliz, 1980): Esta herencia ha sido explotada y perpetuada por los grupos

dominantes que se benefician de ella. Muchos de los estudios reunidos en este volumen muestran, implícita si no explícitamente, cómo esa herencia pesa en la manera de vivir, moldeando tanto los movimientos dirigidos hacia el cambio como las presiones que se resisten a él. Incluso los grupos rebeldes no rompen totalmente con el orden social al cual se oponen.

Los símbolos, las creencias y las organizaciones católicas han influido de maneras diferentes en los movimientos en América Latina, tan diversos como el de las madres que protestan contra la "desaparición" de sus hijos en Argentina, los que están en contra de las medidas de austeridad iniciadas por los gobiernos con el fin de manejar las crisis de la deuda, y los movimientos guerrilleros que han tenido tanto éxito como el de los sandinistas en Nicaragua. La teología católica, mediante los grupos y el clero que ha inspirado, ha instado directamente el desafío. Sin embargo, la influencia del catolicismo es característicamente indirecta. Es un nivel muy fundamental, el catolicismo forma parte de la visión latinoamericana del mundo, con inclusión de los sentimientos sobre los derechos y la justicia. Debido a que el catolicismo sigue teniendo tanta fuerza, los grupos de protesta a menudo incorporan símbolos religiosos en su movimiento aun cuando no estén motivados por preocupaciones específicamente religiosas.

El catolicismo en cuestión, sin embargo, es una variante distintivamente latinoamericana, sobre todo entre las clases "populares". El catolicismo de las clases más bajas incorpora creencias y rituales indígenas y se centra en los santos -incluidos santos mestizos y negros-, no en Jesucristo. Véliz (1980) dice apropiadamente que el catolicismo latinoamericano es latitudinario. Esta latitudinarismo es especialmente evidente en los rebeldes mineros del estaño que Nash describe en el capítulo 5. Las protestas de los mineros no pueden comprenderse meramente en función de su "ubicación de clase" y en sus privaciones económicas. Las creencias primordiales a las que se ha amalgamado el catolicismo han influido en cuánto y cómo los mineros han protestado contra su opresión económica. Los mineros no copian simplemente las creencias y las acciones de sus camaradas mineros en el mundo industrial, ni siquiera cuando el marxismo y otras ideologías occidentales se han abierto paso en las minas.

Además, el catolicismo no ha impuesto un solo sello ideológico en los movimientos de protesta de la región. El catolicismo ha estado asociado con movimientos que van desde la "derecha" a la "izquierda" del espectro político. En la Revolución mexicana, la jerarquía católica tuvo un papel importante en la contrarrevolución, mientras que los zapatistas rebeldes confiaban en la virgen de Guadalupe, santa patrona morena de México, para conducirlos y asistirlos en su lucha contra los hacendados y las autoridades locales por sus derechos a la tierra. En Nicaragua, los sandinistas buscaron su inspiración y su capacidad de organización en la iglesia católica antes de la caída de Somoza. Y la jerarquía ha sido una base de oposición al nuevo régimen. En otras ocasiones, el catolicismo ha influido en los movimientos de protesta que no se identifican con una ideología en particular. Las madres en Argentina, por ejemplo, que incorporaron el simbolismo católico a su movimiento de protesta, se negaron deliberadamente a identificarse con ningún movimiento o partido político.

La tradición latitudinaria contribuye a explicar por qué la raza ha sido muy raras veces la base de la protesta, aun cuando muchos países de la región son racialmente heterogéneos, en ellos hay desigualdades raciales y la gente está muy consciente de esas diferencias. Aunque la gente es muy sensible a las diferencias físicas raciales, como el color de la piel, de acuerdo con la ideología dominante, la raza no es una cuestión biológica sino cultural en América Latina. Por consiguiente, las minorías raciales y étnicas pueden, hasta cierto punto, "pasar". Este concepto de raza difiere notablemente del de África del Sur. Desde la conquista, la iglesia ha concedido a los indios un lugar en el orden social, aunque un lugar inferior.

A la vez, la tradición centralista burocrática latinoamericana también moldea la protesta en la región. Es probable que esta tradición haya minimizado los movimientos declarados contra la autoridad y haya dado a muchos movimientos un componente estatista. La herencia centralista burocrática, por ejemplo, explica sin duda la naturaleza de la protesta en las ciudades capitales en expansión en América Latina. Hemos visto que las protestas en las ciudades se centran, de manera característica, en cuestiones ostensiblemente no políticas, como los derechos a la propiedad, mejores salarios y la calidad y el costo de los bienes y servicios. Los movimientos urbanos raras veces desafían directamente la autoridad del gobierno.

De conformidad con la tradición latitudinal, jerárquica y centralista, los movimientos de protesta en la región han estado más impulsados por la indignación por la injusticia que por la desigualdad. Como hemos visto, las clases "populares" han buscado enmendar asignaciones de tierra injustas y precios injustos. Por ejemplo, en ninguna parte de América Latina los campesinos han presionado por una distribución igualitaria de la tierra. Es posible que de los actos de protesta de los rebeldes hayan nacido sociedades más igualitarias, pero la preocupación por la igualdad no ha sido la fuerza motriz de las protestas en la región.

La herencia latitudinaria centralista burocrática distingue a América Latina de otras regiones del mundo, mientras que el "desarrollo dependiente" caracteriza también a otras regiones del tercer mundo. El "desarrollo dependiente" crea ciertas características distintivas de la fuerza de trabajo, con ramificaciones para la protesta. La industrialización más limitada de América Latina y la posición más privilegiada de su pequeño proletariado con relación a las masas cada vez mayores del "sector informal" urbano y el gran campesinado restante han tendido a hacer que la tranquilidad de los trabajadores sea mayor que la hubo en los países europeos cuando se industrializó. Sin embargo, América Latina debe ser distinguida de otras partes del tercer mundo por su tendencia urbana; el prejuicio contra el campesinado ha exacerbado la migración, cambiando los lugares de conflicto, con el tiempo, a las ciudades. Son los trabajadores urbanos del "sector informal", no el proletariado industrial, quienes constituyen el ejército de reserva en América latina.

Los movimientos laborales más fuertes, basados en la industria, en América Latina se han centrado en las naciones más industriales de la región: Argentina y Chile. Sin embargo, incluso en estos países las demandas de los trabajadores han diferido de sus contrapartes en Europa y Estados Unidos. Juan Perón, quien encabezó el movimiento laboral más importante de la historia

argentina, movilizó a los trabajadores en torno a cuestiones de justicia social de una manera que contribuyó al centralismo burocrático. Mientras que los trabajadores en Europa históricamente ejercieron presión para obtener igualdad política, económica y social, el peronismo se basó en las preocupaciones de los trabajadores por el empleo garantizado por el estado y las prestaciones de la seguridad social. El peronismo reforzó los lazos de los trabajadores con el estado. Los movimientos radicales que pretenden romper con la tradición estatista y transformar el estado raras veces han arraigado en los obreros industriales de América Latina. Los obreros industriales no tuvieron un papel principal en la revolución cubana, y los mineros de Chile –aislados, sujetos a condiciones extremadamente peligrosas, y productores de la principal fuente de divisas del país- han sido, por lo general, más militantes que los trabajadores de las fábricas. La tendencia corporativista de la mayor parte de los movimientos laborales en América Latina refleja la naturaleza estatista centralizada de las sociedades latinoamericanas.

Al resumir los rasgos distintivos del desafío latinoamericano no hay que pasar por lato las diferencias nacionales y subnacionales. Las estructuras del estado y de los pueblos, las bases de la producción, así como la raza y la etnia varían en los países de la región y entre los mismos de forma que moldean los conflictos. Las creencias y las solidaridades indígenas son de la mayor importancia en esos países y regiones en donde las estructuras pueblerinas han sobrevivido (aunque sea en forma modificada) en la era moderna. La tradición latitudinal permite que la modernización se base en las viejas costumbres y prácticas de los pueblos sin que deba desplazarse necesariamente.

Precisamente debido a que el desafío se base en tradiciones históricas, debe ser estudiado en su contexto social. El desafío no está moldeado de manera mecánica por la "ubicación social" de la gente. Los estudios detallados que reúne este libro contribuyen a una mejor comprensión de los rasgos singulares y generales de los movimientos de protesta.

## LAS TAREAS DE ESTOS ESTUDIOS

Los capítulos que siguen no presentan esfuerzos repetidos para abordar el mismo conjunto de preguntas relativas a los orígenes y los resultados de los movimientos de protesta. Tampoco describen, en suma, toda la gama de movimientos de protesta de la región. Por ejemplo, los movimientos urbanos y de la clase media están notablemente poco representados. Por consiguiente, las generalizaciones sobre el patrón de protesta en América Latina que es posible extrapolar de estos ensayos pueden considerarse como provisionales. La contribución de los estudios radica más en el nivel de la descripción, aunque con fundamentos analíticos, que en el nivel de la teoría.

Los autores basan sus argumentos en análisis retrospectivos y en perspectiva, aunque algunos lo hacen de manera más explícita que otros. Los análisis retrospectivos se centran en las causas y las condiciones que, según se muestra,

producen resultados históricos particulares, mientras que los análisis en perspectiva empiezan con una condición histórica particular y especifican las vías que conducen a resultados alternativos. Levine y Mainwaring, por ejemplo, examinan cómo las comunidades de base vinculadas con la iglesia, inspiradas por la teología de la liberación, han tenido efectos diferentes dependiendo de los compromisos del liderazgo local de los grupos y de las relaciones entre la iglesia y el estado; Wickham-Crowley expone los factores que explican los diferentes resultados políticos de los movimientos de guerrilla; y Walton muestra cómo y explica por qué, medidas de austeridad semejantes, han sido enfrentadas con tipos de respuesta diferentes, dependiendo de condiciones políticas, culturales y de organizaciones distintas. Al documentar las distintas trayectorias de los movimientos de guerrilla, Wickman-Crowley señala que no hay nada intrínseco a la ideología, la organización y la base social iniciales de los movimientos que por sí solo determine los resultados de los mismos.

Zamosc combina los análisis retrospectivos y en perspectiva. Las condiciones que explican el nacimiento de un movimiento campesino colombiano, su radicalización y su extinción final se muestran como algo diferentes. El estudio que hace Zamosc del ANUC, al igual que el que hace Wickman-Crowley de los movimientos de guerrilla, nos muestra que no hay necesariamente una relación entre la base de un movimiento, su ideología y el impacto que causa. Si bien mantuvo una base común, el movimiento pasó por varias fases: reformista, radical y conservadora. La evolución del movimiento dependió en gran parte de las condiciones macropolíticas y económicas variables, bastante independientes de las necesidades y de los deseos de la base campesina del ANUC.

Los temas recurrentes en este volumen no constituyen por sí mismos una prueba de que los rasgos más importantes de los movimientos de protesta latinoamericanos han sido delineados. Pueden denotar meramente un conjunto común de predilecciones de los colaboradores. Yo escogí a estos colaboradores no sólo porque tenían un gran conocimiento de movimientos particulares, sino también porque sabía que tratarían una gama semejante de preocupaciones estructurales. Sin embargo, los temas recurrentes no pueden atribuirse a una sola teoría dominante, que indujo a los autores a centrarse en ciertas características con exclusión de otras: los capítulos no fueron escritos para probar una teoría predefinida.

Vistos en conjunto, estos ensayos ofrecen pruebas convincentes de que el enfoque histórico-estructural es fructífero. Sin embargo, no ofrecen por sí solos una base para desacreditar por entero y rechazar ciertas interpretaciones alternativas de los movimientos de protesta, ya que los autores no comprueban específicamente la validez de las teorías alternativas y encuentran que estas alternativas faltan. Aunque he indicado casos en los que un enfoque histórico-estructural puede explicar el patrón de protesta de maneras que otros enfoques no pueden hacerlo, ninguna perspectiva analítica puede explicar todo lo que es pertinente sobre las causas y las consecuencias de la protesta. En algunos aspectos, las explicaciones en los niveles individual y estructural son, en realidad, complementarias. Por ejemplo, un enfoque histórico-estructural no puede explicar por qué, en una serie de condiciones sociales dadas, cualquier individuo puede desafiar o no las condiciones que le desagradan, o los factores psicológicos que predisponen a ciertos individuos a asumir posiciones de liderazgo en los movimientos de protesta;

ese enfoque sólo puede explicar las condiciones que incitan a grupos de personas, colectivamente, a hacer lo que hacen. En la medida en que las explicaciones diferentes requieren pruebas diferentes, los datos que verifican una explicación no desacreditan a otras de manera automática. Por lo tanto, no debemos preguntarnos cuál teoría o cuál perspectiva teórica es cierta y cuál es falsa, sino cuál conduce a hipótesis más interesantes y cuál explica más. Yo creo que los estudios reunidos en este volumen destacan, de manera bastante convincente, el valor de los análisis histórico-estructurales.

Al subrayar la importancia de la estructura social, los autores no niegan ni desestiman el papel de la cultura. Por el contrario, los estudios ejemplifican cómo la cultura alcanza significado mediante la vida de grupo, de organización e institucional. Por esta razón, el mismo conjunto de creencias y costumbres puede estar asociado, en ocasiones, con el comportamiento sumiso y, en otras, con el desafío.

Los ensayos han sido ordenados de acuerdo con la base socioeconómica de los movimientos que los autores describen, ya que las relaciones sociales son tan importantes en la vida de la gente y en el patrón de protesta. En primer lugar se consideran los movimientos campesinos, luego los movimientos de los mineros y de las clases urbanas bajas, trabajadoras y medias. Entre los movimientos que se apoyan en bases sociales semejantes se presenta, primero, los estudios que se centran en protestas localizadas en un solo país y, luego, las protestas localizadas que se centran en uno o más países. Estos capítulos van seguidos de análisis de los movimientos que tienen un alcance nacional y pluriclasista, pero que se centran en un solo país y, después, por estudios transnacionales ampliamente fundamentados. Por consiguiente, los capítulos han sido ordenados de manera que puedan contribuir al establecimiento de teorías. Los casos de estudio individuales van seguidos por análisis de los movimientos que atraen a varias clases.

Estos ensayos son de importancia política y teórica. Aunque no fueron necesariamente escritos pensando en un programa político, todos ellos indican que la vida de los pobres urbanos y rurales no está determinada mecánicamente por las fuerzas económicas o por la política de instituciones formales. Al subrayar la importancia de las alianzas entre clases y el apoyo que la gente que está en una situación mejor brinda a los movimientos de protesta de los pobres, los autores muestran que la gente que está en una situación económicamente desventajosa no necesariamente está sentenciada a una vida de privaciones y degradación. Una mejor comprensión de las preocupaciones de los débiles y de los límites de la política institucional corriente contribuirá, esperamos, a un uso del poder más ilustrado y justo en los años venideros.